CÁMARA DE DIPUTADOS
SALTA

ACTA DE LABOR PARLAMENTARIA

SESIÓN 3 DE NOVIEMBRE DE 2020

LA PRESENTE ACTA DE LABOR PARLAMENTARIA ESTÁ INTEGRADA POR PROYECTOS QUE SON PROPUESTAS DE LOS BLOQUES POLÍTICOS, LOS CUALES SOLAMENTE SERÁN CONSIDERADOS SI CUENTAN CON LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR LAS COMISIONES RESPECTIVAS, EN RAZÓN DE LO CUAL LOS PRESIDENTES DE BLOQUES ELEVAN AL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, D. ESTEBAN AMAT LACROIX, PARA INCORPORAR EN LA MISMA LAS SIGUIENTES SOLICITUDES PARA LA SESIÓN ORDINARIA, NO PRESENCIAL REMOTA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS O VIRTUALES, A CELEBRARSE EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO, CON EL SIGUIENTE ORDEN:

I. SENADO

Expte. 90-28.511/19. Proyecto de Ley nuevamente en revisión: Modificar los artículos 7° y 8°, e incorporar el artículo 7° bis a la Ley 7996 referente al Marco Regulatorio para la investigación médica y el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, art. 7 bis adherir a la Ley Nacional 27530. Con **insistencia** de la Cámara de Senadores en su sanción del 28-05-2020. **Con dictamen de la Comisión de Salud; y sin dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.**

II. DIPUTADOS

1. **Exptes. 91-42.207/20, 91-40.465/18, 91-41.747/19, 91-41.784/20 y 91-42.972/20. Proyectos de ley:** Propone prohibir la fabricación, comercialización, expendio al público, tenencia, acopio, transporte o exhibición de elementos de pirotecnia y modificar el artículo 129 de la Ley 7135. **Sin dictámenes de las Comisiones de Producción; de Seguridad y Participación Ciudadana; de Salud; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General. (B. J. Gustavo Sáenz Conducción)**
2. **Expte. 91-42.456/20. Proyecto de Ley:** Ley de Caducidad de Asuntos Parlamentarios. Derogar la Ley 2389 (1111). **Sin dictamen de la Comisión de Legislación General. (B. J. Gustavo Sáenz Conducción)**
3. **Expte. 91-43.100/20. Proyecto de Ley:** Propone regular la organización y funcionamiento del Colegio de Odontólogos de la provincia de Salta. **Sin dictámenes de las Comisiones de Salud; y de Legislación General. (B. Salta Tiene Futuro)**
4. **Expte. 91-42.982/20. Proyecto de Declaración:** Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del organismo competente y en el marco de la emergencia provocada por la pandemia COVID-19, disponga que el pago de Jubilaciones, Pensiones, IFE, AUH, AUE, PNC y todo otro beneficio sea realizado en todas las entidades bancarias públicas y privadas de la República Argentina. **Sin dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. (B. Salta Tiene Futuro)**
5. **Expte. 91-43.106/20. Proyecto de Ley:** Propone declarar como política prioritaria el servicio público de provisión de agua potable, con el objeto de garantizar y mejorar eficientemente el sistema de captación, depuración, almacenamiento, potabilización, y distribución de agua potable, en la provincia de Salta. **Sin dictámenes de las Comisiones de Obras Públicas; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Derechos Humanos; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General. (B. FpV)**
6. **Exptes. 91-42.988/20 (P.L) y 91-42.986/20 (P.D):** Propone que el uso de armas electrónicas no letales por parte de los funcionarios de la Policía de la Provincia deberá llevarse a cabo en estricto cumplimiento de lo establecido en la presente Ley, en la Ley 7742 "Orgánica de la Policía de la Provincia" y en sus normas reglamentarias. **Con dictámenes de las Comisiones de Seguridad y Participación Ciudadana; y de Derechos Humanos; y sin dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General. (B. J. Gustavo Sáenz Conducción)**
7. **Expte. 91-42.716/20. Proyecto de Resolución:** Propone aprobar el "Protocolo para la prevención e Intervención en situaciones de Violencia Laboral con perspectiva de género en el ámbito de la Cámara de Diputados". **Con dictamen de la Comisión de la Mujer; y sin dictamen de la Comisión de Legislación General. (B. Salta Tiene Futuro)**
8. **Expte. 91-42.819/20. Proyecto de Ley:** Propone regular y promover la explotación convencional de los yacimientos de reserva natural de gas y petróleo denominado "Pozos Someros" de baja profundidad y productividad, ubicados en los departamentos General San Martín, Orán y Rivadavia. **Sin dictámenes de las Comisiones de Energía y Combustibles; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General. (B. FpV)**
9. **Expte. 91-43.114/20. Proyecto de Ley:** Propone regular los honorarios de los profesionales de las Ciencias Criminológicas y Criminológicas. **Sin dictámenes de las Comisiones de Justicia; y de Legislación General. (B. J. Gustavo Sáenz Conducción)**

-----En la ciudad de Salta a los 29 días del mes de octubre del año dos mil veinte.-----

OBSERVACIÓN: EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES ENCONTRARÁ EL TEXTO COMPLETO DE LOS EXPEDIENTES INCLUIDOS EN ACTA DE LABOR.

I. SENADO

Expte. 90-28.511/19

*Cámara de Senadores
Salta*

Nota N° 1328

SALTA, 4 de septiembre de 2020

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de comunicarle que la Cámara de Senadores, en Sesión realizada el día 3 de septiembre de 2020, ha resuelto **insistir** en la sanción dada por este Cuerpo en Sesión del día 28 de mayo de 2020.

Saludo a usted con distinguida consideración.

Firmado: D. Antonio Oscar Marocco, Presidente de la Cámara de Senadores de Salta; y Dr. Luis Guillermo López Mirau, Secretario Legislativo de la Cámara de Senadores de Salta.

SANCIÓN APROBADA POR LA CAMARA DE SENADORES DEL 28-05-2020

NOTA N° 560

SALTA, 2 de junio de 2020

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de llevar a su conocimiento que la Cámara de Senadores, en sesión realizada el día veintiocho del mes de mayo del corriente año, aprobó el presente proyecto de Ley, que pasa en revisión a esa Cámara:

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

Artículo 1°.-Modifícase el art. 7° de la Ley 7.996, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Art. 7°.- El Poder Ejecutivo Provincial puede celebrar Convenios de cooperación con Instituciones Académicas y Científicas, Entidades u Organismos Públicos, Universidades Nacionales y Organizaciones No Gubernamentales debidamente inscriptas en la Provincia de Salta para el cumplimiento del objeto establecido en la presente."

Art. 2°.- Incorpórese como art. 7° bis de la Ley 7.996 el siguiente texto:

"Art. 7° bis.- Declárase de Interés Público Provincial la realización de las actividades destinadas al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, su producción pública y su eventual industrialización para su uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación. El Poder Ejecutivo Provincial, podrá conceder hasta tres licencias o autorizaciones para la realización de las actividades precedentemente descriptas a Organizaciones No Gubernamentales debidamente inscriptas en la Provincia de Salta."

Art. 3°.-Modifícase el art. 8° de la Ley 7.996, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Art. 8°.- Es Autoridad de Aplicación de la presente Ley el Ministerio de Salud Pública de la Provincia o el organismo que en el futuro lo reemplace. Sin perjuicio de las atribuciones que le delegue el Poder Ejecutivo Provincial, tendrá a su cargo las siguientes funciones:

- a) Impulsar la investigación con fines terapéuticos y científicos del uso del cannabis y sus derivados.
- b) Promover la producción pública de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización para su uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación, celebrando los acuerdos o contratos que resulten convenientes o necesarios a tal fin.
- c) Gestionar ante las Autoridades Nacionales competentes las autorizaciones legales previstas en la Ley Nacional 27.350 y normas complementarias.
- d) Implementar medidas que permitan contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de las finalidades de la presente Ley.
- e) Articular las acciones necesarias para el cumplimiento de las competencias que tiene asignadas en su carácter de Autoridad de Aplicación.
- f) Propiciar la difusión, capacitación, concientización y el debate público sobre los aspectos relacionados con la presente Ley.
- g) En general, llevar a cabo todas las acciones necesarias con el propósito de dar cumplimiento con los objetivos de la presente Ley.”

Art. 4º.- El Poder Ejecutivo Provincial podrá delegar en los Ministros Competentes las atribuciones que le confiere la Ley Provincial 7966.

Art. 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores de la provincia de Salta, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil veinte.

Saludo a usted con distinguida consideración.

Firmado: D. Antonio Oscar Marocco, Presidente de la Cámara de Senadores de Salta; y Dr. Luis Guillermo López Mirau, Secretario Legislativo de la Cámara de Senadores de Salta.

Al Señor Presidente
de la Cámara de Diputados
Dn. ESTEBAN AMAT LACROIX
SU DESPACHO

SANCIÓN APROBADA POR DIPUTADOS EL 04-08-2020

Expte. 90-28.511/19

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 7º de la Ley 7.996, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Art. 7º.- El Poder Ejecutivo Provincial puede celebrar Convenios de Cooperación con Instituciones Académicas y Científicas, Entidades u Organismos Públicos y Universidades Nacionales para el cumplimiento del objeto establecido en la presente."

Art. 2º.- Incorpórase como artículo 7º bis de la Ley 7.996 el siguiente texto:

"Art. 7° bis.- Adhiérase la Provincia de Salta a la Ley Nacional 27.350."

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, en Sesión del día cuatro del mes de agosto del año dos mil veinte.

Firmado: Esteban Amat Lacroix - Presidente Cámara de Diputados - Dr. Raúl Romeo Medina - Secretario Legislativo

Expte. 90-28511/19

Ingresado en Mesa de Entradas 20-10-2020

DICTAMEN DE COMISIÓN

EN FORMA NO PRESENCIAL, REMOTA, A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS O VIRTUALES

Cámara de Diputados:

Vuestra Comisión de Salud ha considerado el **Expte. N° 90-28511/19**, Proyecto de Ley nuevamente en Revisión, mediante el cual se modifican los artículos 7° y 8° de la Ley 7996 (Cannabis uso medicinal); y, por las razones que dará el miembro informante, **aconseja INSISTIR EN LA SANCIÓN DADA POR ESTA CÁMARA DE DIPUTADOS EN SESIÓN DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2020.**

Sala de Comisiones, 19 de octubre de 2.020.-

Prestan conformidad con el presente dictamen los diputados:

**LANOCCI, Emma Fátima
PAREDES, Gladys Lidia
DE VITA, Isabel Marcelina
CARTUCCIA, Laura Deolinda
FIGUEROA, Emilia Rosa
JUÁREZ, Mónica Gabriela
OLLER ZAMAR, Marcelo**

**PRESIDENTA
VICEPRESIDENTA
SECRETARIA**

Refrendan el presente para constancia:

María Andrea Cuevas Secretaria de Comisión	Roberto Estanislao Díaz Jefe sala de Comisiones	Raúl Romeo Medina Secretario Legislativo
---	--	---

II. DIPUTADOS

**1. Exptes. 91-42.207/20, 91-40.465/18, 91-41.747/19,
91-41.784/20 y 91-42.972/20**

**Expte. : 91-42207/20
Autor: Dip. Germán Darío Rallé**

Proyecto de Ley

**El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia
Sancionan con fuerza de
Ley:**

Artículo 1°.- Prohíbese, en todo el territorio de la provincia de Salta, la fabricación, comercialización, expendio al público, tenencia, acopio, transporte o exhibición de elementos de pirotecnia por parte de personas físicas o jurídicas.

Art. 2°.- Prohíbese, en todo el territorio de la provincia de Salta, la instalación o habilitación de establecimientos o lugares que alberguen elementos de pirotecnia, acopien o comercialicen materiales inflamables o de aquellos de concurrencia pública, en los términos y límites que establezca la reglamentación.

Art. 3°.- Se exceptúa de esta prohibición a los artificios pirotécnicos, los casos de emergencias de señales náuticas, fuerzas armadas, de seguridad y defensa civil.

Artículo 4°.- La autoridad de aplicación, podrá organizar, en las fechas festivas, eventos especiales y en los lugares que la misma determine adecuados para tal fin, que no interfieran en lo absoluto con tranquilidad de las personas, animales etc. espectáculos de fuegos artificiales, a los que podrán concurrir o apreciar el público o ciudadanos en general en calidad únicamente de espectador.

Art. 5°.- Modifícase el artículo 129 de la Ley 7.135, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Art. 129.- Serán reprimidos con arresto de hasta Treinta (30) días y decomiso.

a) Los que en la vía pública o en el interior de sus domicilios, por medio de explosivos pusieren en peligro la integridad física o bienes de terceros, siempre que el hecho no constituya delito.

b) Los dueños, gerentes, o encargados de armerías o comercios de elementos de pirotecnia, que vendieren pólvora, cohetes u otros elementos de pirotecnia, o sustancias explosivas, particulares, solo podrán comercializar estos elementos a las autoridades competentes y/o Fuerzas de Seguridad.

c) Los que estando o no autorizados por la autoridad competente fabriquen, comercialicen, utilicen, manipulen, acopien, transporten o exhiban elementos de pirotecnia sin observar las normas vigentes en la materia, siempre que el hecho no constituya delito.

d) Los que aun contando con autorización para comercializar, a los organismos competentes, vendieran elementos de pirotecnia no autorizados.

e) Los que ocuparen a menores de dieciocho (18) años y/o a personas no habilitadas para el manejo de explosivos

f) Los que estando autorizados para la venta de elementos de pirotecnia, a los organismos autorizados realizaren modificaciones o transgresiones a las medidas de seguridad y condiciones de venta autorizada, salvo que el hecho constituya delito.

g) Los que hicieren uso de armas de fuego, cuando ello no llegare a constituir delito, se aplicarán las normas previstas en la Ley Nacional N° 20.249 y su decreto reglamentario".

Art. 6°.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será la que determine el Poder Ejecutivo, quien además instrumentará acciones de difusión tendientes a elevar el nivel de conciencia de la población sobre la necesidad de evitar los riesgos de la pirotecnia.

Art. 7°.- Las prohibiciones establecidas en la presente Ley no disminuyen ni alteran las establecidas por las autoridades nacionales competentes en la materia.

Art. 8°.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su reglamentación.

Art. 9°.- Derógase toda norma que se oponga a las disposiciones de la presente Ley.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fundamentos:

Señor Presidente, Señores Legisladores:

Esta nueva Ley, es necesaria y debemos tratar dado la gran utilidad pública, y tiene como principal objetivo prevenir de modo inmediato el grave flagelo que año a año provoca el uso indebido de la pirotecnia, causando innumerables víctimas.

Todos los años para estas fechas se renueva la pasión popular por la pirotecnia. Cualesquiera sean los motivos de tan arraigada costumbre, nadie puede negar que el hábito de explotar cohetes a cielo abierto viene acompañado, generalmente, de dos fenómenos muy negativos: la legión de quemados y lesionados que cada noche de fiesta abarrotan los servicios de urgencia de los hospitales; el "cartel" de comerciantes informales (y aún formales) inescrupulosos que han encontrado en la pirotecnia más dañina una fuente casi segura de ingresos.

Todo indica que la tranquilidad de las personas, la de los perros y otros animales que sufren horriblemente la agresión de la pirotecnia, los costos económicos, laborales y sociales que supone tener cada año a cientos de personas quemadas o mutiladas, y las orgías de ventas que engordan las arcas de aquellos comerciantes, son cuestiones menores frente a la intolerada costumbre popular de celebrar el Natalicio de Jesús y año nuevo con fuego y estruendo.

La alegría de un buen petardo es incomparable con el beneficio de unas fiestas más tranquilas y, especialmente, más seguras. Si la Municipalidad no se anima y no se ocupa de poner freno a una actividad inútil y nociva como la pirotecnia, y no lo va a hacer, entre otros motivos porque parte de los ingresos de los comerciantes van a parar, por un conducto o por otro, a las arcas municipales, nos corresponde a nosotros representantes del pueblo y de una sociedad ávida de transitar por un diario vivir digno justo y protegido por leyes que velen por sus derechos.

No faltará, por supuesto, quien piense que los miguelitos, las baterías, los cohetes-fósforo, los volcanes y las cañitas voladoras forman parte de "nuestra identidad cultural", de forma imprescriptible, inalienable, inescindible e ineluctable. Esto quedó definitivamente probado en estos últimos tiempos en los que casi a diario se realizaron festividades religiosas en tributo de una Virgen popularmente venerada de arraigo y costumbre de un país limítrofe, hecho que causo innumerables denuncias por parte de los vecinos y ciudadanos que vieron perturbado su descanso y actividades normales por el mal empleo de la misma, considerando además el riesgo que esto implica.

Por lo expuesto, solicito a los señores diputados me acompañen con la aprobación del presente proyecto.

.....Muchas Gracias.

Expte.: 91-40465-18

Fecha de ingreso: 27/11/18

Autor: Dip. Andrés Rafael Suriani

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º: Declárese a toda la provincia de Salta "territorio libre de pirotecnia con estruendo (territorio libre de artificios pirotécnicos de efecto audible), con los alcances establecidos en la presente norma, bajo la denominación "pirotecnia cero estruendo".

ART. 2º: Prohibir la comercialización y depósito de elementos pirotécnicos de efecto audible en todo el territorio de la provincia de Salta, contemplados en la disposición Renar N° 77/2.005, modificada por aplicación del Art. 8º, de la disposición Renar N° 222/2.008, hoy Agencia Nacional de Materiales Controlados (Ley N° 27.192), cualquiera que sea su definición genérica y correspondan al inciso que correspondan en tanto cumplan con el criterio y/o parámetro de "artificio pirotécnico de efecto audible" sin excepciones. Esta consideración no resulta taxativa e incluirá en el futuro a todo elemento nuevo, análogo por sus características que corresponda a este requisito.

ART. 3º: Los términos de la prohibición alcanzan a las industrias y comercios radicados en la Provincia, como así también a los vendedores fijos, ambulantes y ocasionales.

ART. 4º: A efectos de compatibilizar la denominación contemplada por esta Ley y la Ley Nacional N° 20.429, se entenderán como sinónimos los términos "elementos pirotécnicos de efecto audible", "pirotecnia con estruendo", "artificios pirotécnicos de efectos audibles", "artículos de pirotecnia sonora exclusivamente" y "artificios pirotécnicos sonoros", ampliándose igualmente su definición, considerándose como tales a todos los artefactos destinados a producir efectos sonoros, audibles o mecánicos, mediante mecanismos de detonación, deflagración, combustión o explosión. Se considera elemento pirotécnico con estruendo a aquel que es destinado a producir efectos audibles, mediante la utilización de mecanismos

de combustión o explosión y cualquier otro análogo en que se utilice cualquier compuesto químico que por sí solo o mezclado con otro puede ser inflamable.

ART. 5º: Queda terminantemente prohibida la utilización de cualquier elemento pirotécnico, se trate de elementos con estruendo o sin estruendo, en espacios cerrados, canchas de fútbol y/o predios para cualquier tipo de eventos deportivos, musicales, políticos, religiosos, culturales, sociales (cumpleaños, bodas, fiestas de egresados) o de otra índole. Esto incluye a las velas que arrojan chispas o llamas.

ART. 6º: Asimismo, queda expresamente prohibido el uso de pirotecnia con estruendo en actividades masivas o no en la vía pública, ya sean procesiones, manifestaciones populares, actos proselitistas, o cualquier otra expresión de carácter religioso, cultural, deportiva, sindical, gremial, político, o similares; incluyendo fiestas patrias y patronales; ya que corresponde al estado predicar con el ejemplo.

ART. 7º: Quedan excluidos de la presente Ley los artificios pirotécnicos destinados a señales de auxilios, emergencias y para el uso de las fuerzas armadas, de seguridad y/o defensa civil, la pirotecnia obligatoria establecida en el protocolo de salvamento y los de uso profesional, siempre que sean empleados en el ejercicio de funciones y no por mera diversión.

ART. 8º: Asimismo, se especifica también la prohibición de comercialización y depósito, utilización, encendido y liberación de globos aerostáticos luminosos.

ART. 9º: El Departamento Ejecutivo Municipal de cada localidad de la Provincia debe realizar campañas destinadas a informar y crear conciencia en la población al respecto.

ART. 10: Ante el incumplimiento de la presente, se aplicarán las siguientes sanciones: a) Multas de acuerdo a la gravedad de la infracción en pesos equivalentes al valor de un (1) litro de nafta súper o su análogo, expresado en unidades tributarias municipales (UT), de 500 (quinientas) UTM para el mínimo y, hasta 5.000 (cinco mil) UTM el máximo. b) Decomiso y destrucción de la totalidad de la mercadería pirotécnica de que se trate, y de los elementos utilizados para comercialización y depósito. c) Si el infractor fuese comerciante o se tratare de una persona física o jurídica, y realizare alguna de las conductas prohibidas en el artículo dos, se ordenará la clausura del lugar o local comercial donde estas se desarrollen, por un término de cinco (5) a diez (10) días hábiles, si se tratare de la primera infracción. d) En caso de reincidencia, la clausura se ordenará por un lapso de quince (15) a treinta (30) días hábiles. e) Para el supuesto de nuevas reincidencias, que tengan lugar dentro del término de dos (2) años de cometida la segunda infracción, se procederá a retirar habilitación de su comercio al infractor, por un término de dos (2) años.

ART. 11: Cuando se tratare de entidades no comerciales cualquiera sea su actividad, y la infracción se produzca en lugares ocupados por las mismas, sea de manera permanente o transitoria, se trate de sitios públicos o privados, en el espectáculos deportivos u otros de los previstos en el artículo segundo, y no se identificase a las personas responsables de la infracción, la entidad de que se trate responderá por dicha infracción, bajo el sistema de sanciones previsto en el artículo nueve, siendo sus autoridades solidariamente responsables.

ART. 12: A todo efecto, se requiere a la Policía de la provincia de Salta a actuar ante cualquier denuncia por uso de pirotecnia, ruidos molestos y demás contravenciones previstas posibles de aplicación en cada caso.

ART. 13: Queda terminantemente prohibida la venta de artículos pirotécnicos en todo el territorio de la provincia de Salta.

ART. 14: La presente norma será de aplicación inmediata, conforme los plazos legales de rigor, pertinentes.

ART. 15: El Poder Ejecutivo Provincial deberá reglamentar la presente Ley dentro de los noventa días de su aprobación, reasignando las partidas presupuestarias que se requieran para dotar la estructura adecuada y suficiente a la función de las fiscalías.

ART. 16: De forma.

FUNDAMENTOS:

Señor Presidente, señores legisladores:

El presente proyecto surge a partir de la presentación formulada por la Sra. Nicole Sasso, referentes de ciudadanos proteccionistas de animales, y por el grupo de profesionales integrantes del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de Salta, el cual luego de un profundo análisis y estudio multidisciplinario concibió el proyecto de marras.

Vale rescatar que los nobles fines propuestos por el presente proyecto tienen en cuenta la tranquilidad y salud de las personas y animales, anhelando resguardar un ambiente sonoro apropiado para ambos.

Asimismo, se tiene a evitar las tragedias y accidentes que han arruinado numerosas vidas y hasta destruido familias.

Por todo lo expuesto, solicito a los Señores Legisladores me acompañen con la aprobación del presente Proyecto de Ley.-

Expte. 91-41747/19

Fecha: 09/12/19

Autora: Dip. Alejandra Beatriz Navarro

**PROYECTO DE LEY
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY**

“Prohibición de uso y distribución de artículos de pirotecnia sonora”

ARTICULO 1°.- Prohíbese en el ámbito de la Provincia de Salta, la comercialización, exhibición, tenencia, manipulación, uso particular, fabricación, depósito, transporte, distribución y venta al público mayorista o minorista y venta ambulante en la vía pública, de artificios pirotécnicos cuyos efectos auditivos o sonoros sean superiores a 84 decibeles, cualquiera fuera su naturaleza y característica, como así también los denominados globos aerostáticos de pirotecnia.

ART. 2°.- A efectos de compatibilizar la denominación contemplada por esta ley y la ley Nacional N° 20.429, se entenderán como sinónimos los términos: "artículos de pirotecnia sonora exclusivamente" y "artificios pirotécnicos sonoros"; ampliándose igualmente su definición, considerándose como tales a todos los artefactos destinados a producir efectos sonoros, audibles o mecánicos superiores a 84 decibeles, mediante mecanismos de detonación, deflagración, combustión o explosión; una bomba de estruendo alcanza los 190 decibeles y un mortero los 145 decibeles.

La autoridad de aplicación evaluará la inclusión de nuevos productos que resulten análogos y/o semejantes por sus características.

ART. 3°.- Se permitirá la producción, fabricación, importación, transporte, comercialización y manipulación de artefactos de pirotecnia que únicamente produzcan efectos lumínicos, cuyos efectos sonoros en el aire sean inferiores a 84 decibeles, previa evaluación de la autoridad de aplicación que acredite el cumplimiento de las disposiciones de seguridad vigentes y se habilite su venta libre cuando su uso no sea capaz de generar daños de mediana o mayor gravedad.

ART. 4°.- Excepciones. Quedan excluidos de la presente ley los artificios pirotécnicos para señales de auxilio, emergencias, uso de las Fuerzas de Seguridad y/o Defensa Civil, los artificios pirotécnicos para la lucha antigranizo y los destinados al uso industrial, minero o el que toda otra actividad productiva o extractiva pudiere hacer de materiales explosivos siempre que sean utilizados en el ejercicio de dichas funciones.

ART. 5°.- Dispóngase la utilización por parte de los Organismos Públicos de la Provincia, de pirotecnia que únicamente produzca efectos lumínicos y juegos de láser y luces en los espectáculos que organicen.

ART. 6°.- La autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad de la Provincia o el organismo que en su futuro lo reemplace.

ART. 7°.- La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo:

a) La coordinación de políticas de control y supervisión de la presente Ley junto a otros organismos provinciales y municipales.
b) La realización de campañas de difusión y concientización sobre los alcances de la presente norma, con el objeto de elevar el nivel de conocimiento de la población sobre la necesidad de evitar los riesgos derivados del uso de la pirotecnia, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil interesadas en la cuestión.

ART. 8°.- El incumplimiento a lo dispuesto en la presente ley hará pasible a los titulares de los establecimientos, instituciones, asociaciones o personas físicas o jurídicas, en los casos que se verifique la infracción, de la aplicación de las siguientes sanciones:

a. Multa desde los veinte mil pesos (\$20.000) a los ciento cincuenta mil pesos (\$150.000).

b. Decomiso de la totalidad de la mercadería pirotécnica de que se trate, y de los elementos utilizados para uso personal, fabricación, tenencia, guarda, acopio, exhibición, manipulación, depósito, circulación, transporte, venta o cualquier otra modalidad de comercialización, según lo previsto en el art. 1.

c. Si el infractor fuese comerciante o se tratase de una persona física o jurídica, y realizare alguna de las conductas prohibidas en el art. 1, se ordenará la clausura del lugar o local comercial donde éstas se desarrollen, por un término de cinco (5) a diez (10) días hábiles, si se tratase de la primera infracción

d. En caso de reincidencia, la clausura se ordenará por un lapso de treinta (30) a sesenta (60) días hábiles.

e. Cuando se tratase de entidades no comerciales, cualquiera sea su actividad, y la infracción se produzca en lugares ocupados por las mismas, sea de manera permanente o transitoria, se trate de sitios públicos o privados, en espectáculos deportivos u otros, y no se identificase a las personas responsables de la infracción, la entidad de que se trate responderá por dicha infracción, bajo el sistema de sanciones previsto en la primera parte de este Artículo.

ART. 9°.- Lo recaudado en concepto de multas que se desprendan de los incumplimientos enunciados en la presente, deberá ser destinado a solventar campañas de concientización sobre los riesgos del uso de la pirotecnia.

ART. 10.- Derógase toda otra norma reglamentaria y regulatoria que se oponga a la presente.

ART. 11.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley en el plazo de sesenta (60) días desde su publicación.

ART. 12.- De forma.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente, Sres. Diputados: con el proyecto de Ley "Prohibición de uso y distribución de artículos de pirotecnia sonora", se busca reglamentar la comercialización, distribución y uso público o privado de artículos de pirotecnia sonora en todo el territorio de la provincia de Salta, con el objetivo de proteger la salud, tranquilidad, bienestar y seguridad de personas y animales, el sano esparcimiento familiar y la protección del medio ambiente.

La utilización de pirotecnia de forma indiscriminada y sin restricción alguna, genera situaciones indeseables para la comunidad en su conjunto.

Diferentes organizaciones sociales, académicas y profesionales advierten sobre los riesgos y consecuencias de esta práctica; distintos organismos públicos realizan campañas preventivas intensas ante cada inicio de temporada, sin que estas recomendaciones logren los efectos deseados.

Por datos estadísticos los usuarios y espectadores de materiales pirotécnicos son los principales, aunque no los únicos perjudicados, al sufrir quemaduras de diversa gravedad, lesiones auditivas u oculares, intoxicaciones o pérdida de miembros. El uso de estos productos también perjudica y en gran magnitud a aquellas personas que padecen trastorno del espectro autista (TEA) y Trastorno Generalizado en Desarrollo (TGD). La sensibilidad auditiva es una de las que se ve más alteradas, según lo expresado por los padres de niños con estos trastornos, generalmente se tapan muy fuerte los oídos, tienen crisis de llanto e incluso llegan a autolesionarse. Toman una posición agresiva para comunicar que los ruidos les molestan, aun cuando se trata de proteger a los niños con tapones en los oídos, y cerrando puertas y ventanas, ya que cada estruendo implica un daño, un sufrimiento para ellos.

También se consideran nocivos los efectos que producen en los animales y el medio ambiente.

Por ejemplo una bomba de estruendo alcanza los 190 decibeles y un mortero los 145 decibeles, mientras que el oído tiene la capacidad de tolerar sonidos hasta 90 decibeles sin que se produzca daño.

En los últimos años, se establecieron regulaciones en algunos municipios de nuestra provincia y otras ciudades de nuestro país, con respecto de la limitación en la comercialización y el uso de artefactos pirotécnicos.

Señores Diputados, nos urge establecer esta normativa para controlar y regular la actividad pirotécnica a los efectos de proteger la salud y vida de nuestros ciudadanos, el cuidado de los animales y la preservación del medio ambiente.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente Proyecto de Ley.

Expte.: 91-41784/20

Fecha: 07/01/20

Autor: Dip. Esteban Amat Lacroix

PROYECTO DE LEY
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA,
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY

ARTICULO 1°.- Prohíbese en el ámbito de la provincia de Salta, la comercialización, exhibición, tenencia, manipulación, uso particular, fabricación, depósito, transporte, distribución y venta al público mayorista o minorista y venta ambulante en la vía pública, de artificios pirotécnicos cuyos efectos audibles o sonoros sean superiores a 84 decibeles, cualquiera fuera su naturaleza y característica, como así también los denominados globos aerostáticos de pirotecnia.

ARTICULO 2°.- Se permitirá la producción, fabricación, importación, transporte, comercialización y manipulación de artefactos de pirotecnia que únicamente produzcan efectos lumínicos, cuyos efectos sonoros en el aire sean inferiores a 84 decibeles, previa evaluación de la autoridad de aplicación que acredite el cumplimiento de las disposiciones de seguridad vigentes y se habilite su venta libre cuando su uso no sea capaz de generar daños de mediana o mayor gravedad.

ARTICULO 3°.- Quedan excluidos de la presente Ley los artificios pirotécnicos para señales de auxilio, emergencias, uso de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y/o Defensa Civil, los artificios pirotécnicos para la lucha antigranizo, los elementos de pirotecnia para navegación en nuestros ríos y diques, así también como los destinados al uso industrial o minero o el que toda otra actividad productiva o extractiva pudiere hacer de materiales explosivos siempre que sean utilizados en el ejercicio de dichas funciones.

ARTICULO 4°.- Dispóngase la utilización por parte del Poder Ejecutivo Provincial, de pirotecnia que únicamente produzca efectos lumínicos y juegos de láser y luces en los espectáculos que organice.

ARTICULO 5°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley será determinada por el Poder Ejecutivo Provincial.

ARTICULO 6°.- La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo:

- a) La coordinación de políticas de control y supervisión de la presente Ley junto a organismos provinciales y municipales.
- b) La realización de campañas de difusión y concientización sobre los alcances de la presente norma, con el objeto de elevar el nivel de conocimiento de la población sobre la necesidad de evitar los riesgos derivados del uso de la pirotecnia, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil interesadas en la cuestión.

ARTICULO 7°.- El incumplimiento de la presente Ley será sancionado con multas equivalentes a 2 (dos) salarios mínimo vital y móvil hasta veinticinco (25) salarios mínimo vital y móvil y clausura de diez (10) a noventa (90) días del local, establecimiento, comercio, y en su caso, comiso de las mercaderías, los responsables, propietarios, gerentes, encargados, que violaren lo establecido en la presente Ley.

Sin perjuicio de lo expuesto, la autoridad de aplicación podrá clausurar preventivamente hasta por tres días los locales, establecimientos o comercios en los que se hubiere constatado la infracción. Este plazo podrá ser prorrogado hasta un máximo de quince días por una resolución fundada.

ARTICULO 8°.- Lo recaudado en concepto de multas que se desprendan de los incumplimientos enunciados en la presente, deberá ser destinado a solventar campañas de concientización sobre los riesgos del uso de la pirotecnia.

ARTICULO 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Mediante esta presentación pongo en consideración de mis pares el proyecto de Ley de “Prohibición de uso y distribución de artículos de pirotecnia sonora”, a través del mismo, se busca reglamentar la comercialización, distribución y uso público o privado de artículos de pirotecnia sonora en todo el ámbito de la Provincia de Salta, con el objetivo de proteger la salud, tranquilidad, bienestar y seguridad de personas y animales, el sano esparcimiento familiar y la protección del medio ambiente.

En los últimos años, hemos asistido a una proliferación de regulaciones locales, mayoritariamente municipales, respecto de la limitación en el uso de artefactos pirotécnicos. Provincias y Municipios han avanzado en este mismo sentido: Neuquén, Mendoza, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, y Municipios como Salta Capital, Bolívar, Bahía Blanca, San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, etc.

El uso libre y sin control de pirotecnia afecta de diversas formas a sectores vulnerables de la sociedad, los niños, la fauna y el ambiente, por lo que dicha actividad debe regularse en pos de su protección, conforme el principio constitucional de protección de la salud y seguridad de los consumidores.

La necesidad de regular su uso surge de la propia peligrosidad de estos artefactos. Los usuarios y espectadores de éstos productos son los principales -aunque no los únicos- perjudicados, al sufrir quemaduras de diversa gravedad, lesiones auditivas u oculares, intoxicaciones o pérdida de miembros. Según información de la Sociedad Argentina de Pediatría “los heridos no necesariamente manejan los explosivos. De hecho, casi la mitad de las personas lesionadas por fuegos artificiales son espectadores, de acuerdo a un estudio internacional. Según la Academia Americana de Oftalmología, los niños son víctimas frecuentes: 30 por ciento de quienes sufren lesiones por fuegos artificiales durante las festividades se encuentran entre los 15 años de edad o menos” (<http://www.sap.org.ar/novedades/193/peligros-de-la-pirotecnia-en-los-ninos-recomendaciones.html>).

También se perjudica a aquellas personas que, sin utilizar artículos de pirotecnia o ser espectadores, padecen de forma grave su uso por terceros, como personas con trastorno del espectro autista (TEA) y Trastorno Generalizado en Desarrollo (TGD), considerando también nocivos los efectos que producen en los animales y medio ambiente.

En este sentido, el “Informe sobre prevención de lesiones en los niños” elaborado conjuntamente entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, señala que “las quemaduras pueden tener consecuencias importantes a largo plazo que, de no existir un programa de rehabilitación integral y coordinado, dejan niños con cicatrices físicas y psicológicas para el resto de sus vidas. Además las quemaduras pueden representar una gran carga económica para los servicios de atención de salud. Los juegos pirotécnicos, además de quemaduras también pueden provocar intoxicaciones, envenenamiento y hasta contaminación sonora y ambiental. (...) Los artículos pirotécnicos entrañan un gran riesgo para los niños, sobre todo para los adolescentes.

Asimismo, y en relación a las personas que sin utilizar estos artículos se ven perjudicadas, debemos concientizar sobre el daño que sufren los ancianos y los bebés, y en particular las personas que sufren trastorno del espectro autista (TEA), y Trastorno Generalizado en Desarrollo (TGD), siendo una de las características de estos trastornos la sensibilidad auditiva.

La sensibilidad auditiva es una de las que se ve más alteradas, por eso, según lo expresado por los padres de niños con estos trastornos, generalmente se tapan muy fuerte los oídos, tienen crisis de llanto e incluso llegan a autolesionarse. Toman una posición agresiva para comunicar que los ruidos les molestan, aun cuando se trata de proteger a los niños con tapones en los oídos, y cerrando puertas y ventanas, ya que cada estruendo implica un daño, un sufrimiento para ellos. Es dable destacar que la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdeA) promueve la no utilización de pirotecnia, debido a los problemas que estos causan en sus hijos y familia. Hace años que lanzaron la campaña Pirotecnia Cero con el fin de avanzar en este objetivo.

Aquí, cobra especial relevancia la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, aprobada en 2007 mediante Ley 26.378. Dicha Convención tiene el propósito de “proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Al tiempo que nos señala en su Artículo 17 el derecho de las personas con

discapacidad “a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás”. Ello implica una obligación por parte del Estado de impulsar modificaciones legislativas en pos de su protección, aún cuando debamos promover, para ello, cambios culturales y costumbres, como la de festejar utilizando artificios pirotécnicos. Dicha convención expresa en este sentido, el compromiso de los Estados parte de adoptar “medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad” de los mismos.

Además, debe considerarse el daño que el uso de pirotecnia provoca en animales: genera taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo y/o muerte. Los efectos en los animales son diversos y de diferente intensidad y gravedad. Los perros suelen sentir temor y al huir pueden ser víctimas de accidentes o perderse. Quisiera destacar aquí las campañas de las sociedades protectoras de animales de todo el país que bregan por la no utilización de la pirotecnia.

Por último, debe mencionarse también el impacto ambiental del uso de los artículos de pirotecnia, así como los riesgos de incendios en casas y vehículos.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.

Expte. 91-42972/20

Fecha: 30-09-20

Autores: Dips. Luis Albeza, Mónica Juárez y Pedro Sandez

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia

sancionan con fuerza de LEY

ARTÍCULO 1º: Prohíbese en el ámbito de la Provincia de Salta la tenencia, comercialización, exhibición, fabricación, depósito, transporte, distribución y venta al público, mayorista o minorista, así como la manipulación, detonación y uso particular de artificios pirotécnicos cuyos efectos audibles o sonoros sean superiores a 80 (ochenta) decibeles, cualquiera fuera su naturaleza y característica.

ARTÍCULO 2º: A efectos de conciliar los términos empleados por esta ley y la ley Nacional Nº 20.429, se entenderán como sinónimos los términos: "artículos de pirotecnia sonora exclusivamente" y "artificios pirotécnicos sonoros"; ampliándose igualmente su definición, considerándose como tales a todos los artefactos destinados a producir efectos sonoros, audibles superiores a 80 decibeles, mediante mecanismos de detonación, estruendo, combustión o explosión.

ARTÍCULO 3º: Quedan exceptuados de lo dispuesto por el artículo 1º de la presente ley los elementos de pirotecnia y/o cohetería destinados a producir señales de emergencia y/o auxilio, los empleados por

las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Defensa Civil, así como los utilizados para la defensa antigranizo y en la industria minera o en actividades técnicas extractivas.

ARTÍCULO 4°: Quedan excluidos de la presente ley los artificios pirotécnicos lumínicos exclusivos, como cañas voladoras, estrellas, juegos de luces sin sonido, y productos pirotécnicos lumínicos.

ARTÍCULO 5°: Dispóngase por parte del Estado Provincial y municipios de la Provincia de Salta, la utilización exclusivamente de pirotecnia que produzca efectos lumínicos y juegos de luces en los espectáculos que organicen.

ARTÍCULO 6°: La Autoridad de Aplicación de la presente ley será determinada por el Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 7°: Sanciones. El incumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, hará pasible a los titulares de los establecimientos, instituciones, asociaciones o personas físicas o jurídicas, en los casos que se verifique la infracción, de la aplicación de las siguientes sanciones:

- a) Multa graduable entre 2 y 40 salarios mínimos vitales y móviles.
- b) Decomiso de la totalidad de la mercadería en infracción de que se trate, y de los elementos utilizados para uso personal, fabricación, tenencia, acopio, exhibición, manipulación, depósito, transporte, venta o cualquier otra modalidad de comercialización, según la prohibición establecida en el artículo 1.
- c) Si el infractor fuese un comerciante o se tratase de una persona física o jurídica, e incumpliera las disposiciones establecidas en el artículo 1, se procederá a la clausura del establecimiento o local comercial donde desarrollara las actividades, por un término de cinco (5) a quince (15) días hábiles si se tratase de la primera infracción, duplicándose la sanción en caso de reincidencia.

ARTÍCULO 8°: Deróguese toda norma que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 9°: Invítase a los Municipios a adherir a la presente ley.

ARTÍCULO 10°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fundamentos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha pronunciado sobre que el oído humano puede tolerar 55 decibeles sin ningún daño a su salud. Y dependiendo del tiempo de exposición, ruidos mayores a los 60 decibeles pueden provocarnos malestares físicos. El dolor de cabeza es uno de ellos, además de taquicardias, agitación en la respiración y parpadeos acelerados. También los músculos se pueden poner tensos. Pero si una persona se expone durante mucho tiempo a más de 85 decibeles puede incluso correr riesgos cardiovasculares.

El "umbral de audición" representa la cantidad mínima de sonido o de vibraciones por segundo requeridas para que el sonido lo pueda percibir el oído humano. Ese número de vibraciones se corresponde con una frecuencia aproximada de 1 kHz (10-12 W/m²). Un sonido de 70 dB produce efectos psicológicos negativos en tareas que requieren concentración y atención, mientras que entre 80 y 90 dB puede producir reacciones de estrés, cansancio y alteración del sueño.

Los ruidos entre 100 y 110 dB, denominado "umbral tóxico", pueden llegar a ocasionar lesiones del oído medio. Los ruidos superiores a los 120 dB entran en el denominado "umbral del dolor", es decir, son ruidos insoportables que provocan sensación de dolor en el oído humano. Son sonidos que superan 1 W/m².

Los sonidos que percibimos se clasifican en relación a la intensidad y son expresados en decibeles (db) en diferentes entornos y ambientes y a grandes rasgos pueden entenderse de la siguiente manera:

ENTORNO	AMBIENTE	DECIBELES (dB)
Estudios de radio, televisión y grabación de sonido	Silencioso	0 a 20
Áreas residenciales de noche, hospitales y conversaciones a no más de 1 m de distancia	Poco ruidoso	40 a 80
Tráfico intenso en la calle	Muy ruidoso	80 a 100
Despegue de un avión de reacción (150) o una nave espacial a 1 m de distancia (180)	Insoportable	120 a 180

En los últimos tiempos se ha incrementado notablemente la utilización de artificios pirotécnicos de manera imprudente, provocando un efecto negativo no solo en las personas sino también en los animales y en el medio ambiente;

Los artificios pirotécnicos en la actualidad no solo se detonan en la época de navidad y fin de año, sino que su uso se ha extendido durante todo el año, habiéndose incorporado su utilización en fiestas patronales, eventos deportivos, musicales y hasta en eventos privados, como casamientos y eventos sociales y recreativos;

Una cantidad importante de la población mundial padece Trastorno del Espectro Autista (TEA) incluyendo a los pacientes con síndrome de Asperger. El TEA tiene entre sus síntomas la hipersensibilidad en sus sentidos y sobre todo la auditiva y las personas que presentan dicho trastorno son extremadamente

sensibles a los estímulos externos: sonidos, imágenes, olores, y por lo tanto la pirotecnia los afecta directamente. Generalmente, como reacción a estos estímulos tan fuertes pueden responder tapándose los oídos fuertemente, teniendo crisis de llanto, de gritos e inclusive pueden llegar a autolesionarse;

Idéntico trastornos ocasionan los ruidos molestos en las personas con Fibromialgia, pues su cerebro capta y "aumenta el volumen" de hasta el más pequeño e insignificante ruido;

Por otra parte, y no menos importante, debe ponderarse la situación de lesiones auditivas y trastornos que provocan los ruidos de los artificios pirotécnicos en los animales. Cada año mueren un número considerable de aves silvestres debido al estrés provocado por la violencia y persistencia de los estallidos;

Los animales de compañía, cuyo sentido auditivo es mucho más a sensible que el nuestro, identifican las explosiones como una señal de peligro y entran en estado de pánico; muchos escapan de sus domicilios y algunos causan accidente viales y mueren atropellados en la vía pública;

La Declaración Universal de los derechos de los animales aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su Artículo N° 11 señala "Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida" y, en el Artículo N° 12 detalla: "a) Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio es decir, un crimen contra la especie; b) La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio."

Existen elementos de pirotecnia con brillantes fuegos artificiales, que le permiten a la ciudadanía disfrutar de las fiestas, sin perturbar a los ciudadanos ni a los animales;

Con este Proyecto no se pretende prohibir la actividad, sino, con ánimo de protección a la salud humana y de los animales, se pretende regular su uso a los fines de proteger los derechos de terceros, de los animales y el medio ambiente;

Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley.

2. Expte. 91-42.456/20

Autores: Dips. Esteban Amat Lacroix, Laura Deolinda Cartuccia, Ricardo Javier Diez Villa, Germán Darío Rallé, y Enrique Daniel Sansone.

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y

CADUCIDAD DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS

Artículo 1º.- Todo proyecto de Ley a consideración de la Legislatura que no obtenga sanción en una de sus Cámaras durante el año parlamentario en que tuvo entrada en el Cuerpo, o en el siguiente, se tendrá por caducado. El plazo de vigencia de todo proyecto de Ley que obtenga sanción en la Cámara de origen, se prorroga por dos años más en la Cámara Revisora, contando desde el año parlamentario en el que ingresó a la misma.

Art. 2º.- Los Presidentes de las Comisiones de ambas Cámaras Legislativas elevarán a la Secretaría Legislativa correspondiente la nómina de los asuntos que estén comprendidos en esta Ley. Esta nómina se incluirá en los Asuntos Entrados de la Primera Sesión Ordinaria de cada período para su consideración; una vez aprobado, sin más trámite serán mandados al archivo con la anotación correspondiente puesta por Secretaría, devolviéndose a los interesados los documentos que les pertenezcan y soliciten, previo recibo que deberán otorgar en el mismo expediente.

Art. 3º.- Los asuntos pendientes con Orden del Día como las iniciativas de los particulares caducarán en virtud de la presente Ley.

Art. 4º.- Cada Cámara establecerá los plazos de vigencia y reglamentará los procedimientos para la caducidad y archivo de las iniciativas parlamentarias que no sean proyectos de Ley que se hubieran sometido a su consideración.

Art. 5º.- Deróguese la Ley 2389 (Original 1111) de Caducidad de Expedientes Parlamentarios y toda otra norma que se oponga a la presente.

Art. 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTO

El presente proyecto de Ley tiene como objeto rediseñar el régimen de caducidad de los asuntos parlamentarios a fin de establecer un criterio único de interpretación y cabe destacar que en reiteradas oportunidades se intentó actualizar esta Ley.

Considero que corresponde actualizar la normativa que fue creada en el año 1949 y adecuarla a los tiempos presentes.

El “año parlamentario” o “período legislativo” que se tiene en cuenta para considerar los períodos durante los cuales está en trámite un proyecto de Ley, entendiéndose por tal el plazo que abarca desde el 1º de abril hasta el 30 de noviembre de cada año, extendiéndose hasta la prórroga de Sesiones Ordinarias, en caso que se prorroguen las Sesiones Ordinarias.

El plazo a computar la caducidad de un asunto corresponde al Período Legislativo en que el proyecto toma estado parlamentario.

En el caso de los proyectos con media sanción la redacción propuesta es clara, que el expediente tendrá dos años más en la Cámara Revisora.

También con esta nueva Ley queda claro que ya no hay excepciones dispuestas, como previa la antigua Ley 1111 (2389) que establecía como excepciones los Códigos y otros.

El objetivo de este proyecto es la unificación de criterios entre ambas Cámaras Legislativas, para la aplicación de este régimen de caducidad de expedientes parlamentarios.

Por los motivos expresados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

3.- Expte.: 91-43.100/20

Fecha de ingres: 19-10-2020

Autores: Dips. Laura Deolinda Cartuccia, Esteban Amat Lacroix, Ricardo Javier Diez Villa, Marcelo Rubén Oller Zamar, y Germán Darío Rallé.

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA,

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY

COLEGIO DE ODONTÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE SALTA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°: La presente Ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Colegio de Odontólogos de la provincia de Salta como una Persona Jurídica de Derecho Público No Estatal, creado por Decreto Ley N° 391/63 con jurisdicción en toda la provincia de Salta.

ART. 2°: El Colegio de Odontólogos tiene su sede en la ciudad de Salta Capital, pudiendo constituir delegaciones en otras localidades de la Provincia, con funciones que serán establecidas por la reglamentación emanada del mismo.

ART. 3°: El Colegio de Odontólogos cumplirá las funciones de control público de la actividad profesional que habilita el título de odontólogo otorgado o reconocido por el Estado Nacional: control de la matrícula profesional, poder disciplinario de los profesionales odontólogos por los actos o actuaciones cumplidas en la Provincia, registro de la actividad de colaboración de los auxiliares del odontólogo, como así también las demás funciones que se determinen en la presente Ley, su reglamentación y normas complementarias o concurrentes.

ART. 4°: Integran el Colegio todos los odontólogos que ejercen la profesión en el territorio de la provincia de Salta. Para ello se le otorgará la matrícula habilitante para el ejercicio profesional de la Odontología expedida por el Colegio. Consecuentemente implica el ejercicio del poder disciplinario sobre el matriculado y el acatamiento de este al cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados por esta Ley, así como también de todas disposiciones emergentes de leyes, decretos o resoluciones incluyendo las reglamentaciones del mismo Colegio.

ART. 5°: Se entiende por control público de la actividad profesional a partir de la matriculación, la habilitación del ejercicio profesional, que comprende la valoración ética y de actualización

permanente del profesional y sus auxiliares, determinar los aranceles de las prestaciones, habilitación y registro de espacios e instrumental mínimos e equipamiento para el correcto ejercicio, estudio y promoción de políticas sanitarias odontológicas, participando en su implementación, siendo su objetivo el logro y mantenimiento del derecho a la salud de toda la población.

CAPITULO II

DE LAS FINALIDADES, DEBERES Y PROPÓSITOS

ART. 6°: Corresponde al Colegio de Odontólogos de Salta las siguientes finalidades, deberes y propósitos:

- a) Velar y asegurar el correcto y regular ejercicio de la profesión y su eficaz desempeño en resguardo de la salud pública, estableciendo los medios necesarios para estos fines;
- b) Promover ante los poderes públicos la sanción de leyes, reglamentos, etcétera; relacionados con el ejercicio profesional, como así también, el mejoramiento científico, cultural, moral y económico de los profesionales.
- c) Contribuir con las autoridades al estudio y solución de los problemas de Salud Pública;
- d) Control y gobierno de la matrícula de odontólogos que ejerzan en forma habitual o esporádica, autónoma o dependiente, actividades técnicas o docentes para las que se requiera el título habilitante;
- e) Registro y control de las actividades del auxiliar del odontólogo;
- f) Velar por el fiel cumplimiento de leyes, decretos y disposiciones/reglamentos, resoluciones en materia de salud en su concepto integral a partir de la Odontología;
- g) Colaborar en asegurar el correcto y regular ejercicio de la profesión velando la dignidad y decoro profesional de los odontólogos arbitrando, en su caso, las acciones pertinentes para hacer efectiva la defensa de la profesión al servicio de la comunidad.
- e) Combatir por los medios legales a su alcance, el ejercicio ilegal de la profesión.

ART. 7°: Para el cumplimiento de sus finalidades, ajusta su funcionamiento a las siguientes facultades, funciones y deberes:

- a) Ejercer el control y gobierno de la matrícula de odontólogos en la Provincia, ejerciendo el poder disciplinario sobre ellos, conforme a las normas establecidas en la presente Ley y el Estatuto que apruebe la Asamblea de Delegados o Consejo de Distritos.
- b) Ejercer la Superintendencia de los que se desempeñan como auxiliares en la práctica profesional del odontólogo;
- c) Habilitar e inspeccionar los lugares donde se ejerza la profesión y sus actividades auxiliares;
- d) Vigilar que la odontología no sea ejercida por personas carentes de título habilitante, o que no se encuentren matriculados, como asimismo la expedición de títulos, diplomas, o certificados en infracción a las disposiciones legales, estando habilitado a intervenir como parte interesada en toda tramitación administrativa o judicial al respecto;
- e) Aplicar las normas de ética profesional establecidas en el Código de Ética que inexcusablemente deberán observar los odontólogos, así como toda otra disposición relativa al funcionamiento del Colegio y aplicar las sanciones que aseguren su cumplimiento.
- f) Controlar el efectivo cumplimiento de las sanciones disciplinarias impuestas a los odontólogos matriculados.

g) Administrar los bienes y fondos del Colegio de conformidad con la presente Ley, sus estatutos, el reglamento interno, y al presupuesto de gastos y cálculo de recursos debidamente aprobados por la Asamblea;

h) Fijar el monto de los derechos de inscripción y mantenimiento de la matrícula y demás registros;

i) Establecer el monto de la hora odontológica y los aranceles de las prestaciones fijadas por un nomenclador y basados en una estructura de costos con metodologías que las que puedan ser ponderables la totalidad de los gastos fijos y variables necesarios para que el odontólogo pueda ejercer su profesión en un ámbito que le permita desplegar su ciencia, técnica y ética con los elementos imprescindibles para una salvaguarda impoluta de la salud de sus pacientes, velando siempre por el correcto ejercicio de la profesión en resguardo de la salud pública. Como así también las certificaciones, legalizaciones, y demás servicios prestados por el Colegio y, en todos los casos, los eventuales recargos.

j) Cooperar en los estudios de planes académicos y/o universitarios de la Odontología, el doctorado y de cursos especiales, realizando o participando en trabajos, congresos, reuniones y conferencias.

k) Exigir el cumplimiento de la educación continua de los matriculados, registrando sus antecedentes, mediante reglamentación a dictarse;

l) Fundar y sostener biblioteca, hemeroteca, videoteca, etc. especialmente médica-odontológica y fomentar becas y premios que estimulen y propicien la profundización del estudio y especialización de la ciencia odontológica;

m) Intervenir como árbitro o jurado en las causas que le sean sometidas, tanto en cuestiones en que sea parte el Estado, los particulares o las que se susciten entre profesionales, o entre éstos y sus pacientes.

n) Tutelar la inviolabilidad del secreto profesional en todos sus órdenes, colaborando en la instrumentación de la historia clínica y del consentimiento informado;

o) Certificar y legalizar la firma de los matriculados en todo lo atinente al ejercicio profesional, y crear formularios oficiales para certificaciones profesionales;

p) Certificar y llevar el registro de las especialidades odontológicas habilitadas por autoridad competente y autorizar el uso del título correspondiente, de acuerdo con lo que establezcan las normas y reglamentaciones respectivas.

q) Participar como tribunal evaluador y/o veedor en los concursos para cargos o funciones tanto en la actividad pública como en la privada;

r) Fiscalizar los avisos, anuncios y toda otra forma de propaganda relacionada con el ejercicio de la Odontología, según lo que establezca la reglamentación que dicte al respecto;

s) Establecer y mantener vinculaciones con las entidades del ejercicio de la Odontología, dentro y fuera del país, similares, gremiales y científicas;

t) Defender, a petición del matriculado, su legítimo interés profesional, para asegurar el principio de independencia en el ejercicio de la profesión tanto en su aspecto general, como en las cuestiones que pudieren suscitarse con las entidades patronales, públicas o privadas, obras sociales y prepagas, homologando los contratos o convenios que surgieren de dichas relaciones en resguardo de la salud pública;

u) Colaborar con las autoridades mediante la realización de informes, estudios, proyectos y demás trabajos relacionados con la profesión, la salud pública, las ciencias odontológico-médico-sociales y en la elaboración de la legislación sanitaria promoviendo o participando en reuniones, conferencias o congresos por medio de sus delegados.

CAPITULO III
DE LAS AUTORIDADES

ART. 8°: Son autoridades del Colegio

- a) El Consejo de Distritos.
- b) La Mesa Directiva.
- c) El Tribunal de Ética y Ejercicio Profesional.
- d) El Tribunal de Apelación.

ART. 9°: El Consejo de Distritos es la autoridad máxima del Colegio.

Estará integrado por los representantes titulares y suplentes de los Distritos Sanitarios. Su sede estará en la ciudad de Salta.

Constituyen los Distritos Sanitarios, los distintos Departamentos de la Provincia que cuenten con profesionales inscriptos.

Los representantes de los Distritos Sanitarios serán elegidos en la siguiente proporción:

Los distritos sanitarios se conforman de la siguiente manera:

- 1) a los Distritos que posean un 4% del padrón o menos le corresponderán dos (2) delegados;
- 2) a los Distritos que posean más del 4% del padrón y hasta el 10% le corresponderán un total de cuatro (4) delegados;
- 3) a los Distritos que posean más del 10% del padrón y hasta el 30% le corresponderán un total de nueve (9) delegados;
- 4) a los Distritos que posean un 30% del padrón o más le corresponderán un total de doce (12) delegados. El departamento Capital se divide en dos distritos sanitarios, Norte y Sur.

En el mismo acto se elegirán representantes suplentes, en igual número que los titulares, que reemplazarán a estos cuando dejen de serlo o cuando se ausenten, con causa justificada, a una Asamblea de Distritos. Los representantes durarán tres años en sus funciones.

Serán autoridades del Consejo de Distritos: el Presidente y el Secretario, elegidos del seno del Consejo en la fecha de su constitución.

ART. 10: Son funciones del Consejo de Distritos:

- a) Dictar el Estatuto y reglamentos del Colegio e introducir en los mismos las modificaciones necesarias;
- b) Entender en los casos de licencias, por más de sesenta días y de renunciaciones de las autoridades designadas, como también revocar tales designaciones, cuando estuvieren incurso en las causales que se establecerán en el Reglamento respectivo.
- c) Fijar la cuota mensual que deberán satisfacer los profesionales inscriptos en la matrícula.
- d) Designar los miembros de la Mesa Directiva, el Tribunal de Ética y Ejercicio Profesional y el de Apelaciones.
- e) Designar de entre sus miembros dos Revisores de Cuentas, que durarán un año en sus funciones.
- f) Elaborar los anteproyectos de estatutos, ordenanzas, decretos, leyes y reglamentaciones del arte de curar, destinados a asegurar el cumplimiento de los fines específicos del Colegio y efectuar las peticiones respectivas a las autoridades correspondientes para su sanción

ART. 11: El Consejo de Distritos se reunirá:

- a) General, Presupuesto de Gastos y fijación de la cuota mensual establecida en el art. 13, Inc. c).
- b) Extraordinariamente, por iniciativa de la Mesa directiva o a pedido de más de la tercera parte de sus miembros; en este último caso se cursará comunicación de la Mesa Directiva expresando los motivos que determinan la reunión.

Las formas y términos de las convocatorias y el funcionamiento del Consejo de Distritos serán establecidos por el respectivo Estatuto y/o Reglamento.

ART. 12: Los Delegados de Distritos presentarán ante la Mesa Directiva, las cuestiones de sus respectivas jurisdicciones y, a su vez, cumplirán con esta, las tareas que aquella les encomendase.

ART. 13: La concurrencia a las reuniones del Consejo de Distritos es obligatoria, salvo casos debidamente justificados.

ART. 14: La Mesa Directiva es el organismo que ejerce la representación natural y legal del Colegio y estará integrada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Vocal Titular y Tres Vocales Suplentes, todos ellos designados por el Consejo de Distritos, entre sus miembros titulares o suplentes, al iniciarse cada periodo de actuación del mismo. Sus miembros durarán tres años en las funciones asignadas.

ART. 15: Son atribuciones y derechos de la Mesa Directiva:

- a) Administrar y representar al Colegio.
- b) Velar por el correcto y regular ejercicio profesional y su eficaz desempeño, en resguardo de la salud pública; todo ello dentro de la observancia de las más puras normas éticas, elevando al Tribunal de Ética y Ejercicio Profesional las transgresiones o incumplimientos para su dictamen y sanción.
- c) Ejecutar las sanciones impuestas por el Tribunal de Ética y Ejercicio Profesional.
- d) Organizar y llevar el Registro de Matrícula de los profesionales y de todos los auxiliares del odontólogo;
- e) Establecer los aranceles de matriculación, de especialistas, de habilitación de consultorios y laboratorios, de cursos, de docentes y toda otra actividad inherente al ejercicio profesional.
- f) Designar las comisiones y subcomisiones internas que estime necesarias, las que podrán o no estar constituidas por miembros de los órganos directivos.
- g) Elevar a la Asamblea de Delegados, para su aprobación, los aranceles profesionales y el valor de la hora odontológica con su respectivo mecanismo de actualización.
- h) Organizar los legajos con los antecedentes profesionales de cada matriculado y producir informes sobre dichos antecedentes a solicitud del interesado o de la autoridad competente.
- i) Recaudar y administrar los fondos del Colegio, fijar dentro del Presupuesto las respectivas partidas de gastos, sueldo del personal administrativo, viáticos y/o gastos de representación de las autoridades y toda inversión necesaria al desarrollo económico de la Institución.
- j) Disponer el nombramiento y remoción de empleados.
- k) Convocar al Consejo de Distritos y someter a su consideración los asuntos de su incumbencia.
- l) Colaborar con los poderes públicos en toda gestión vinculada al ejercicio del arte de curar y especialmente para combatir el ejercicio ilegal de la profesión.
- m) Habilitar e inspeccionar los consultorios y demás espacios destinados al ejercicio de la Odontología y como así también los de los auxiliares del odontólogo
- n) Ejercer todas las facultades y atribuciones emanadas de la presente Ley que no hayan sido conferidas específicamente a otros órganos.

ART. 16: Los miembros de la Mesa Directiva recibirán como retribución de su trabajo, las asignaciones y/o gastos de representación que le fije el Consejo de Distritos.

ART. 17: El tribunal de Ética y Ejercicio Profesional estará integrado por tres miembros titulares y dos suplentes, que durarán tres años en sus funciones y serán designados por el Consejo de Distritos entre los profesionales colegiados, pertenezcan o no al Consejo.

ART. 18: El Tribunal de Ética y Ejercicio Profesional, tiene por funciones instruir los sumarios correspondientes, dictar resolución sobre cualquier transgresión a las leyes, decretos y todas las disposiciones sobre el ejercicio profesional y del Código de Ética Odontológica que forma parte de la presente Ley. Dichos miembros podrán percibir los viáticos y/o gastos de representación que fije la Mesa Directiva.

ART. 19: Los miembros del Tribunal de Ética y Ejercicio Profesional son recusables por las causas establecidas para los jueces en el Código Procesal respectivo, no admitiéndose la recusación sin causa.

ART. 20: El Tribunal de Ética podrá disponer directamente la comparecencia del imputado, de los testigos y realizar inspecciones, verificar expedientes y realizar todo tipo de diligencias.

ART. 21: El Tribunal de Apelación estará integrado por tres miembros titulares y dos suplentes, designados por el Consejo de Distritos de su seno, y se renovarán cada tres años pudiendo ser reelegidos.

ART. 22: El Tribunal de Apelación tiene por funciones actuar en los recursos interpuestos contra las sanciones aplicadas por la Mesa Directiva y el Tribunal de Ética y Ejercicio Profesional, conforme con la respectiva reglamentación.

ART. 23: Es atribución exclusiva del Colegio la fiscalización del correcto ejercicio de la profesión de odontólogo. A tales efectos, ejercerá el poder disciplinario con independencia de la responsabilidad civil, penal y/o administrativa que pueda imputarse a los matriculados.

En ningún caso se podrá aplicar sanción alguna sin sumario previo y sin que el inculpado haya sido citado para comparecer dentro del término de diez (10) días hábiles para ser oído en su defensa como mínimos, según los términos fijados en el Reglamento respectivo.

ART. 24: Los odontólogos matriculados quedarán sujetos a las sanciones disciplinarias previstas en esta Ley, por las siguientes causas:

a) Todo incumplimiento a las normas establecidas por esta Ley, Estatutos y Reglamentos

b) Incumplimiento de las normas y principios establecidos en el Código de Ética dictado por el Colegio.

c) Condena judicial por la comisión de delito doloso o condena que comporte inhabilitación profesional.

ART. 25: En todos los casos que recaiga sentencia penal condenatoria de un odontólogo, será obligación del Tribunal interviniente comunicar al Colegio la pena aplicada, con remisión de copia íntegra del fallo recaído y la certificación de que la sentencia se encuentra firme.

Cuando se impongan sanciones de suspensión, éstas se harán efectivas a partir de los treinta (30) días de quedar firmes.

ART. 26: Las acciones disciplinarias prescribirán a los dos (2) años de producidos los hechos que autoricen su ejercicio y siempre que quienes tuvieran interés en promoverlas hubieran podido, razonablemente, tener conocimiento de ellos. Cuando hubiere condena penal, el plazo de prescripción de las acciones disciplinarias de esta Ley será de seis (6) meses a contar desde la notificación al Colegio.

ART. 27: El plazo de prescripción queda interrumpido:

a) por la secuela de la causa, salvo que el procedimiento no fuere impulsado por un periodo mayor a 12 meses,

b) por la comisión de otra infracción.

ART. 28: El Tribunal de Ética, por resolución fundada, podrá acordar la rehabilitación del odontólogo excluido de la matrícula, siempre que hayan transcurrido dos (2) años como mínimo del fallo disciplinario firme y hayan cesado las consecuencias de la condena penal, si la hubo.

ART. 29: Las sanciones aplicadas por este Tribunal serán anotadas en el legajo correspondiente del profesional sancionado.

La renuncia o baja de la matrícula no impedirá el juzgamiento del inculpado.

Las resoluciones que dispongan una sanción a un matriculado podrán ser apeladas ante el fuero Contencioso Administrativo.

ART. 30: No podrán los Colegiados tener dos cargos en el seno del Colegio.

CAPITULO IV

DE LOS PROFESIONALES COLEGIADOS

ART. 31: Son sus deberes y derechos:

- a) Comunicar dentro de los diez días de producido todo cambio de domicilio. Como así también la cesación o reanudación de sus actividades profesionales indicando los lugares donde ejerce;
- b) Requerir la habilitación de su consultorio, y ejercer en los que estén debidamente habilitados;
- c) Notificar al Colegio la nómina de sus auxiliares;
- d) Comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional;
- e) El profesional no deberá pautar garantías sobre prácticas odontológicas en ningún pacto, contrato, convenio, acuerdo o regulación sin excepción. Los odontólogos en todos los casos solamente podrán comprometerse a prestar servicios odontológicos de conformidad con las reglas del arte y la ciencia odontológica, absteniéndose de asegurar la infalibilidad y/o duración de los tratamientos realizados.
- f) Respetar el valor de la hora odontológica que fije el Colegio y sus aranceles;
- g) Satisfacer la cuota mensual de matriculación determinada por el Consejo de Distritos;
- h) Emitir el voto en las elecciones para designar autoridades del Colegio;
- i) Solicitar la correspondiente certificación para utilizar el título de especialista, de acuerdo a las normas fijadas en la reglamentación respectiva y en el Código de Ética y Ejercicio Profesional;
- j) Desempeñar las comisiones que le fueran encomendadas por las autoridades del Colegio, salvo causa de fuerza mayor;
- k) Comparecer ante la Mesa Directiva, cada vez que la misma lo requiera, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas;
- l) Interponer recursos ante el Tribunal de Apelación contra las sanciones que, establecidas por el Tribunal de Ética y Ejercicio Profesional, le aplique la Mesa Directiva, dentro del término de cinco días hábiles;
- m) Proponer por escrito toda iniciativa tendiente al mejor desenvolvimiento de la actividad profesional;
- n) Ser electos para el desempeño de cargos en los órganos directivos del Colegio;
- o) Ejercer libremente su profesión de acuerdo a las normas del ejercicio profesional;
- p) Guardar el secreto profesional.

CAPITULO V

DE LOS RECURSOS

ART. 32: Serán recursos económicos del Colegio:

- a) La cuota mensual fijada por el Consejo de Distritos;
- b) El derecho de Inscripción en la correspondiente matrícula o del título de especialista;
- c) El importe de las multas que se apliquen según las disposiciones de la presente Ley, Estatuto y Reglamentaciones;
- d) Los legados, donaciones, herencias y subvenciones;
- e) Derecho de habilitaciones e inspección de consultorios, centros, establecimientos y demás registros a su cargo;
- f) El importe proveniente de la certificación de firmas de los matriculados;
- g) Los aranceles que perciba el Colegio por los servicios que preste;
- h) Los intereses y frutos civiles de los bienes del Colegio;
- i) Todo otro ingreso proveniente de actividades realizadas en cumplimiento de las funciones establecidas por la legislación vigente.

CAPITULO VI

DE LAS ELECCIONES

ART. 33: Los representantes de Distritos serán elegidos por los colegiados, mediante el voto secreto obligatorio.

ART. 34: Para ser representante de Distrito, se exige el ejercicio profesional habitual y continuado de dos (2) años como mínimo, en el Distrito respectivo.

ART. 35: Para ser elegido miembro de la Mesa Directiva, del Tribunal de Ética y Ejercicio Profesional y del Tribunal de Apelación, se requerirá un mínimo de cinco años de ejercicio continuado de la profesión en la Provincia, y antecedentes intachables.

ART. 36: Los colegiados que se abstuvieran de votar sin causa justificada, serán pasibles de una multa que será determinada por el Consejo de Distritos.

ART. 37: La fiscalización del acto eleccionario será cumplida por los representantes designados por las Asociaciones Civiles Profesionales.

ART. 38: Toda cuestión no prevista, del régimen electoral, será resuelta por el Estatuto y/o la reglamentación respectiva.

CAPITULO VII

DESCRIPCIONES TRANSITORIAS

ART. 39.- Las autoridades actualmente constituidas en el Colegio de Odontólogos continuarán en sus cargos hasta la finalización de su mandato. Al momento del llamado a elecciones se deberán aplicar las disposiciones contenidas en la presente Ley.

ART. 40.- El Consejo de Delegados de Distrito deberá dictar un Código de Ética que será de cumplimiento Obligatorio para los Odontólogos de la provincia de Salta.

ART. 41.- Deróguese toda otra norma que se oponga a la presente.

ART. 42.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS:

La presente iniciativa tiene como objeto perfeccionar la organización y el funcionamiento del Colegio de Odontólogos de la provincia de Salta como una Persona Jurídica de Derecho Público No Estatal.

Es dable destacar que el mismo fue creado mediante Decreto Ley N° 391/63, pero como un apéndice del Colegio de Médicos de la provincia de Salta, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Decreto Ley N° 327/63 y 9114/65 con jurisdicción en toda la provincia de Salta.

Como se puede observar, no solo por el transcurso del tiempo sino fundamentalmente por el avance de las ciencias vinculadas a la salud y su relación con la sociedad a la que tienen por objeto brindar su atención resulta necesario y procedente modernizar las normas que reglamentan este tipo de instituciones intermedias.

Por tal razón solicitamos a nuestros pares nos acompañen con su voto para la aprobación de este proyecto.

4.- Expte. 91-42.982/20

Fecha: 01-10-20

Autores: Dips. Ricardo Javier Diez Villa, Amelia Elizabeth Acosta, Jorge Ignacio Jarsún Lamónaca, Mario Enrique Moreno Ovalle, Antonio Sebastián Otero, Teófilo Nicolás Puentes, Noelia Cecilia Rigo Barea, José Federico Rodríguez, Enrique Daniel Sansone, Daniel Alejandro Segura Giménez, Andrés Rafael Suriani, Adrián Alfredo Valenzuela Giantomasi, María Silvia Varg, María del Socorro Villamayor.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del organismo competente y en el marco de la emergencia provocada por la pandemia COVID-19 disponga que el pago de Jubilaciones, Pensiones, IFE, AUH, AUE, PNC, así también como todo otro beneficio, sea realizado en todas las entidades bancarias públicas y privadas de la República Argentina.

5.- Expte. 91-43.106/20

Fecha: 20/10/20

Autores: Dips. Franco Esteban Francisco Hernández Berni, Luis Fernando Albeza, Ana Laura Córdoba, Jorgelina Silvana Juárez, Luis Antonio Hoyos, Iván Guerino del Milagro Mizzau, Gladys Lidia Paredes, Jesús Ramón Villa y Carlos Raúl Zapata.

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY

ARTÍCULO 1º: Declárese como política prioritaria el servicio público de provisión de agua potable, con el objeto de garantizar y mejorar eficientemente el sistema de captación, depuración, almacenamiento, potabilización, y distribución del agua potable, en la Provincia de Salta

ART. 2º: Autorícese al Poder Ejecutivo Provincial a implementar una política pública anual para la disposición fondos públicos y reestructuraciones de partidas presupuestarias con el objeto de ser destinadas exclusivamente a la realización de obras públicas de infraestructura, que permitan mejorar la obtención y abastecimiento de agua potable apta para el consumo de las poblaciones en forma autónoma para cada uno de los municipios de la provincia de Salta.

ART. 3º: Las obras a desarrollarse en virtud del objeto de la presente Ley, se enmarcarán en un estudio y análisis previamente definido, con la finalidad de captar nuevas cuencas de aguas subterráneas para su respectiva exploración, cateo y explotación de acuíferos en el territorio definido por la presente Ley.

ART. 4º: Facúltese al Ministerio de Infraestructura o el organismo que en el futuro lo reemplace, como Autoridad de Aplicación de la presente Ley, a instrumentar las políticas establecidas y dictar las disposiciones complementarias para dar cumplimiento al objeto de la presente Ley. -

ART. 5º: De Forma.

Fundamentos

Señor Presidente y Diputados/as:

El presente Proyecto de Ley tiene como finalidad declarar como política prioritaria el servicio público de provisión de Agua Potable en todo el territorio de nuestra Provincia.

En tal sentido, se pretende garantizar y mejorar las condiciones de prestación, regularidad y eficiencia en la prestación del servicio público de Agua Potable para cada salteño, que viene padeciendo serios problemas estructurales, hace varias décadas, debido a la falta de inversión y políticas públicas para tal fin.

Asimismo, se ha profundizado por el crecimiento poblacional, como así también, por encontrarse muchas obras necesarias inconclusas como, por ejemplo: el Alteo de la represa “El Limoncito”, ampliación de la planta potabilizadora del Dique Itiyuro, obras en Capiazuti para proveer del servicio a la localidad Aguaray, pozos en Yacuy y el acueducto hacia la planta potabilizadora de Tartagal.

Las mismas corresponden a algunas de las obras que deberían haber estado terminadas hace varios años; ya que las mismas fueron firmadas, presupuestadas y licitadas, pero nunca se concretaron, por Ley 7.691 “Fondo de Reparación Histórica del Norte Argentino”.

Cabe destacar que, la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A - Aguas del Norte, no supo responder a las demandas y exigencias que los usuarios necesitan, ocasionando reiteradas interrupciones en el servicio, afectando la calidad de vida de los habitantes; a su vez, entendiéndose que este servicio público, es de carácter esencial y vital, para el bienestar de los habitantes de la provincia.

La respuesta a la problemática no es otra que la realización de las obras de infraestructura necesarias para una mejor prestación del mismo, en este contexto, el proyecto propone declararlo como política pública prioritaria y otorgando facultades a Poder Ejecutivo Provincial para la reasignación de fondos para concluir aquellas obras que estaban previstas en años anteriores, pero que por diversos motivos no fueron realizadas, generando mayor atraso y un servicio de peor calidad.

Lamentablemente si no abastecemos de agua potable en el territorio provincial, no podremos hablar de progreso ni crecimiento sustentable, ya que junto con el suministro de energía eléctrica manifiestan un grave problema de infraestructura.

Por lo tanto, declarar como política prioritaria el servicio público de provisión de agua potable por el lapso de 24 meses en la provincia de Salta, será la herramienta legislativa necesaria para avanzar en la solución de los problemas estructurales en materia de agua potable que padecen los habitantes de la Provincia, con el aporte de los fondos existentes para tal sentido.

De esta manera, con la aprobación del presente proyecto de Ley, se podrá contar, de manera inmediata, con los fondos necesarios para financiar un determinado plan de obras y lograr la inversión estipulada para mejorar en forma significativa los niveles de abastecimiento actual de agua potable en el todo el territorio de la Provincia.

Este proyecto es fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores, es por ello, que, por estas razones, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto de Ley.

6.- Exptes. 91-42.988/20 y 91-42.986/20
--

Expte.91-42.988/20

Fecha: 02-10-20

Autor: Dip. Gustavo Orlando Orozco

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO 1°.- Los funcionarios de la POLICÍA DE SALTA cumplirán los deberes que les impone la Ley, contra actos ilegales, en consonancia con el grado de responsabilidad exigido por su profesión, en cumplimiento y en protección de la dignidad humana y los derechos humanos de todas las personas. Sólo podrán usar las armas electrónicas no letales, cuando sea estrictamente necesario en el cumplimiento de sus deberes y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

ART. 2°.- Se hará uso de las armas electrónicas no letales cuando resulten ineficaces otros medios no violentos, en los siguientes casos:

- a. Para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien represente o manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de autolesionarse.
- b. Cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas.
- c. Para impedir la comisión de un delito de acción pública.

ART. 3°.- Podrán emplear armas electrónicas no letales todos los funcionarios de la Policía de Salta que hayan sido especialmente instruidos para su empleo, luego de haber recibido capacitación específica.

ART. 4°.- Ante el necesario empleo de armas electrónicas no letales, funcionarios de la POLICÍA DE SALTA deberán identificarse como tales de viva voz advirtiendo su inmediata intervención, salvo que dicha acción pueda suponer un riesgo de lesiones para otras personas, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso.

ART. 5°.- Se considerará que existe peligro inminente, entre otras situaciones, en las siguientes circunstancias:

- a. Cuando se desarrollen conductas amenazantes que pongan en peligro la integridad física del agente o de terceras personas.
- b. Cuando se manifiesten conductas violentas que indiquen la inminencia de un ataque al agente o a terceras personas.
- c. Cuando el número de los ofensores o la imprevisibilidad de la agresión esgrimida, impida materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas.
- d. Cuando sea estrictamente necesario en el cumplimiento de sus deberes y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

ART. 6°.- Luego del uso de armas electrónicas no letales, se procederá a analizar los archivos de audio y video que deberán registrar las mismas, a los efectos de efectuar el pertinente control administrativo.

ART. 7°.- Las armas eléctricas no letales que se adquieran deberán cumplir, al menos, con las especificaciones técnicas detalladas en el ANEXO I, que es parte integrante de la presente.

ART. 8°.- El Ministerio de Seguridad deberá adherirse al Protocolo del uso de Armas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ART.9°.- Instrúyase al Ministerio de Seguridad a que procedan a la inmediata implementación de cursos de capacitación específica para el empleo de armas electrónicas no letales.

ART. 10.- De forma.

ANEXO

LINEAMIENTOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las armas eléctricas no letales instituidas por la presente deberán:

- Disparar dos (2) dardos de acero inoxidable propulsados por gas inerte a una distancia mínima de 6 metros, con posibilidad de interrupción de la descarga eléctrica automáticamente o en cualquier momento a través de la acción del operador, siendo el tiempo máximo por ciclo de operación de cinco (5) segundos.
- Poseer mira láser y linterna, permitiendo la ayuda a la visualización en ambientes de baja luminosidad y un visor que indique cuándo el dispositivo está aplicando carga eléctrica, tanto en el modo contacto directo como para el disparado, además de exhibir fecha, hora, estado de carga remanente de la batería.
- Contar con botón ambidiestro eyector de cartucho y llave también ambidiestra que encienda y apaga el dispositivo durante la aplicación del pulso eléctrico en el agresor.
- Registrar en su memoria interna la fecha, hora y duración de los disparos efectuados y ser capaz exportar los datos mencionados con el fin de poder elaborar el correspondiente informe. Asimismo, deberá contar con una cámara que registre en video el momento del disparo.
- Poseer un número de serie marcado y registrado externamente en el dispositivo, así como en la memoria interna del arma.
- Contar con baterías recargables con celdas de litio.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La reciente noticia de la muerte de un inspector de la Policía Federal Argentina (PFA) asesinado de cuatro puñaladas en el barrio porteño de Palermo por un hombre en aparente situación de calle y con presuntas alteraciones mentales que terminó baleado y que luego también falleció, sacó otra vez a la luz la necesidad de equipar con armas no letales al personal policial.

Este suceso lamentable, que ocasionó la pérdida de dos vidas humanas se hubiera evitado si el policía; que vive diariamente situaciones violentas; no tuviera como única defensa frente a la agresión su arma de fuego, que es un arma de guerra, en general una pistola calibre 9 mm con proyectil encamisado que tiene un gran poder de penetración, hacer un disparo con esa arma puede significar que al traspasar el cuerpo del objetivo también se cause daños a terceros inocentes y por ello es que existen tantas recomendaciones al momento de utilizarla.

Puedo afirmar que en Salta al policía como parte de su deber se le exige un acto de valor y recibe un entrenamiento basado en la defensa de la vida, y en la convicción de que el arma de fuego es el último recurso a utilizar. A ningún policía se lo forma para que se convierta en homicida porque sin dudas abatir a un ser humano por más delincuente que sea, creo que deja secuelas imborrables en el personal.

Las Naciones Unidas desalientan el uso de las armas de fuego, y establece que la fuerza se usará cuando los demás medios legítimos resulten ineficaces, y el uso de la fuerza no acarree consecuencias más lesivas. Bajo el principio de proporcionalidad, por el cual el uso de la fuerza se resuelve en relación con la gravedad del delito y el objetivo de salvaguardar el de legalidad, que incluye la adecuación a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y el de responsabilidad, por el cual, el personal debe rendir cuentas por cada acción.

El Nuevo Reglamento para el uso de Armas (Resolución 956-2018) que contempla el uso de armas no letales, solamente alcanza a las Fuerzas Federales (Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval), pero es necesario que se haga extensivo a la Policía de nuestra Provincia.

Por ello propongo, se provea de un equipamiento más moderno para la Policía de Salta, y se lo dote de armamento de efecto no letal, pero que inmovilice por algunos segundos al oponente como es el caso de la pistola eléctrica Taser, en defensa de la vida de todos los ciudadanos y sobre todo evitar muertes injustas como las mencionadas precedentemente.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del mismo.

Expte. 91-42.986/20

Fecha: 01-10-20

Autores: Dips. Omar Exeni Armiñana y Jorge Ignacio Jarsún Lamónaca

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Seguridad adquiriera con el objeto de combatir el delito, los dispositivos electrónicos no letales de control denominados Pistola Taser para su utilización por parte de la Policía de la Provincia como método de prevención en situaciones de nivel intermedio de uso de la fuerza.

Asimismo, en tal caso establezca un protocolo para su utilización teniendo en cuenta en qué situaciones los agentes del orden deberán evitar su uso.

INGRESÓ EN MESA DE ENTRADAS 29-10-2020

Exptes. N^{os} 91-42.988/20 y 91-42.986/20

DICTAMEN DE COMISION

EN FORMA NO PRESENCIAL, REMOTA, A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS O VIRTUALES

Cámara de Diputados:

Vuestra Comisión de Seguridad y Participación Ciudadana ha considerado en forma virtual (video conferencia) los Expedientes N^{os} 91-42.988/20 (PL) y 91-42.986/20 (PD) de los señores Diputados Gustavo Orlando Orozco; Ignacio Jarsún Lamónaca y Omar Armiñana Exeni, respectivamente: Los Funcionarios de la Policía de la provincia de Salta solo podrán usar armas electrónicas no letales cuando sea estrictamente necesario, en el cumplimiento de sus deberes; y, por las razones que dará el miembro informante, **ACONSEJA LA APROBACION DEL SIGUENTE PROYECTO DE LEY:**

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY

ARTÍCULO 1°.- El uso de armas electrónicas no letales por parte de los funcionarios de la Policía de la Provincia deberá llevarse a cabo en estricto cumplimiento de lo establecido en la presente Ley, en la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Salta N^o 7742 y en sus normas reglamentarias.

ART. 2°.- Se hará uso de las armas electrónicas no letales cuando resulten ineficaces otros medios no violentos, en los siguientes casos:

- a. Para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien represente o manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de autolesionarse.
- b. Cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas.
- c. Para impedir la comisión de un delito de acción pública.

ART. 3°.- Podrán emplear armas electrónicas no letales todos los funcionarios de la Policía Salta que hayan sido especialmente instruidos para su empleo.

ART. 4°.-Ante el necesario empleo de armas electrónicas no letales, funcionarios de la Policía de Salta deberán identificarse como tales de viva voz advirtiendo su inmediata intervención, salvo que dicha acción pueda suponer un riesgo de lesiones para otras personas, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso.

ART. 5°.-Se considerará que existe peligro inminente, entre otras situaciones, en las siguientes circunstancias:

a. Cuando se desarrollen conductas amenazantes que pongan en peligro la integridad física del agente o de terceras personas.

b. Cuando se manifiesten conductas violentas que indiquen la inminencia de un ataque al agente o a terceras personas.

c. Cuando el número de los ofensores o la imprevisibilidad de la agresión esgrimida, impida materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas.

d. Cuando sea estrictamente necesario en el cumplimiento de sus deberes y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

ART. 6°.-Luego del uso de armas electrónicas no letales, se procederá a analizar los archivos de audio y video que deberán registrar las mismas, a los efectos de efectuar el pertinente control administrativo.

ART. 7°.-Las armas electrónicas no letales que se adquieran deberán cumplir, al menos, con las especificaciones técnicas detalladas en el ANEXO I, que es parte integrante de la presente.

ART. 8°.-La autoridad de aplicación elaborará un protocolo para el uso de las armas electrónicas no letales por parte de los miembros de la Policía de la Provincia y deberá implementar de forma inmediata el dictado de cursos de capacitación específica para el empleo de las mismas.

ART. 9°.- La autoridad de aplicación elaborará un registro de las armas electrónicas no letales adquiridas por la Policía de la Provincia especificando el usuario al que se le entregue cada una de ellas.

ART. 10.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente ley y determinará el plazo de adquisición de las armas electrónicas no letales de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

ART. 11.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley, se imputarán a las partidas presupuestarias correspondientes del Ejercicio vigente.

ART. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisiones, 28 de octubre de 2020.-

PRESTAN CONFORMIDAD CON EL PRESENTE DICTAMEN LOS SEÑORES DIPUTADOS:

GUSTAVO ORLANDO OROZCO - PRESIDENTE

LINO FERNANDO YONAR - SECRETARIO

OSBALDO FRANCISCO ACOSTA

MARCELO OLLER ZAMAR

GERMAN DARIO RALLÉ

ANA LAURA CÓRDOBA

EDUARDO RAMON DÍAZ

REFRENDAN EL PRESENTE PARA CONSTANCIA

ABRAHAM JORGE CATAcata

ROBERTO ESTANISLAO DÍAZ

DR. RAÚL ROMEO MEDINA

ADMINISTRATIVO

JEFE SECTOR COMISIONES

SECRETARIO LEGISLATIVO

INGRESÓ EN MESA DE ENTRADAS 27-10-2020

Expte. Nº 91-42988/20

02/10/20

DICTAMEN DE COMISION

Cámara de Diputados:

Vuestra **Comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor**, ha considerado en reunión virtual (video conferencia), el Proyecto de Ley del Señor Diputado Gustavo Orlando Orozco, el cual propone: Los Funcionarios de la Policía de la provincia de Salta solo podrán usar armas electrónicas no letales cuando sea estrictamente necesario, en el cumplimiento de sus deberes; y, por las razones que dará el miembro informante, **aconseja su rechazo.**

Sala de Comisiones, 26 de octubre de 2020.-

Prestan su conformidad al presente dictamen los Diputados:

Júarez , Jorgelina Silvana

Presidenta

Moreno Ovalle, Mario Enrique

Valenzuela Giantomasi, Adrián Alfredo

Varg, María Silvia

Godoy, Manuel Santiago

Del Plá, Claudio Ariel

Suscriben el presente para constancia:

Diana Marina Medici Administratia	Roberto Estanislao Díaz Jefe Sala de Comisiones	Raúl Romeo Medina Secretario Legislativo
--------------------------------------	--	---

7.- Expte. 91-42.716/20

Fecha: 07/08/20

Autora: Dip. María Silvia Varg

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
RESUELVE

Aprobar el “Protocolo para la Prevención e Intervención en situaciones de Violencia Laboral con perspectiva de género en el ámbito de la Cámara de Diputados”, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.

Estipular el plazo de noventa (90) días corridos desde la aprobación de la presente resolución, para su reglamentación.

ANEXO

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE VIOLENCIA LABORAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 1º.- El presente Protocolo tiene por objeto prevenir y erradicar la violencia en el ámbito laboral, garantizando un ambiente libre de discriminación por cuestiones de género, identidad de género, orientación sexual, o de cualquier otro tipo en el ámbito de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta.

La Cámara de Diputados promueve acciones de concientización y capacitación para prevenir la violencia laboral y garantizar el respeto, la igualdad y equidad.

Artículo 2º.-Confórmase un Comité de Seguimiento de Violencia Laboral y de Género integrado por al menos tres (3) empleados de la Cámara de Diputados designados para prestar funciones por el Presidente, debiendo respetar la paridad de género en su conformación.

Artículo 3º.- El Comité tiene por misión recibir denuncias, generar un ámbito de contención y confianza, y brindar a la persona denunciante acompañamiento, asesoramiento, asistencia psicológica.

Artículo 4º.- Se entiende por violencia laboral las acciones y omisiones de personas o grupo de personas que, en ocasión del ámbito o relación laboral, en el espacio físico o virtual, en forma sistemática y recurrente, atenten contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y social

de una persona, mediante acoso sexual, abusos, abuso de poder, ataques, amenazas, intimidación, amedrentamiento, trato discriminatorio, maltrato físico, moral, psicológico y/o social. Se considera que la violencia laboral reviste especial gravedad cuando la víctima se encuentre en una situación de particular vulnerabilidad, por razón de su edad, estado de salud, inferioridad jerárquica, u otra condición análoga. Las enumeraciones del presente artículo no revisten carácter taxativo.

Artículo 5º.- Son principios rectores:

- a) Asistencia. La persona denunciante recibirá, durante todo el procedimiento, asesoramiento a través del Comité de Seguimiento de Violencia Laboral y de Género.
- b) Reserva de Identidad. Desde el inicio y hasta la finalización del procedimiento, se deberá garantizar a la persona denunciante la confidencialidad de los hechos y el resguardo absoluto de su identidad, así como de las demás personas involucradas y testigos. La reserva de la identidad de la persona damnificada se extiende aún después de concluido el procedimiento.
- c) Protección a denunciantes y testigos. Ninguna persona trabajadora que haya sido víctima de violencia laboral, que haya denunciado las mismas o haya comparecido como testigo, podrá sufrir perjuicio alguno en su empleo o en cualquier otro ámbito, cuando el mismo le fuera ocasionado como represalia por su denuncia o testimonio.
- d) Se presume, salvo prueba en contrario, que cualquier alteración en las condiciones de empleo que resulte perjudicial para la persona afectada, obedece a su denuncia o participación en el procedimiento relacionado con la violencia laboral, cuando dicha alteración ocurre dentro de los seis (6) meses subsiguientes a su denuncia o participación.
- e) No revictimización. Se evitará que una persona denunciante realice reiteración innecesaria de los hechos que denuncie, a fin de evitarle sufrimiento.

Artículo 6º.- Queda automáticamente invalidada para formar parte del procedimiento, aquella persona miembro del Comité que resulte denunciada por alguno de los supuestos previstos en este cuerpo. También queda exceptuada de intervenir cuando se encuentre afectada por relación de parentesco o afectiva, de amistad o enemistad manifiesta con las personas denunciantes o denunciadas.

Artículo 7º.- Son funciones del Comité:

- a) Tomar las consultas, presentaciones y denuncias; y si correspondiese, remitirlas a la Comisión de la Mujer para que dictamine al efecto.
- b) Llevar adelante los procedimientos previstos en este Protocolo.
- c) Elaborar informes escritos, fundados y rubricados por las personas miembros.
- d) Confeccionar estadísticas de los casos de violencia laboral que se denuncien, a fin de tener un mapa integral de la situación y adoptar o perfeccionar las medidas de prevención.
- e) Impulsar la realización de campañas y cursos para la prevención de la violencia laboral, así como la difusión del presente Protocolo.
- f) Comunicar al superior Jerárquico de la persona denunciante la presunta comisión de un hecho contemplado por este Protocolo, salvo que fuere éste quien lo hubiere cometido, en cuyo caso debe informarlo al funcionario superior del denunciado.

Artículo 8º.- El procedimiento a llevarse adelante ante las denuncias previstas en este Protocolo tiene carácter de urgente, debiendo contemplar los principios del artículo 5º. Sin perjuicio de la reglamentación, se deben observar los siguientes preceptos:

a) Presentación: la persona puede denunciar la existencia de acciones o situaciones de violencia laboral ante el Comité por escrito o a través de una dirección de correo electrónico, y debe ratificarlo dentro de las 48 hs. por escrito o personalmente.

b) Entrevista: El Comité de oficio o a pedido de parte, fija una entrevista personal con la persona denunciante en el plazo que determine la reglamentación, la que prevé las situaciones urgentes. En caso de corresponder, se remite el informe a la Comisión de la Mujer para que dictamine al efecto.

c) Etapas de Resolución: Recibida la presentación, el Comité realiza un análisis detallado de los hechos y analiza la entidad de los mismos. Ante la existencia de supuestos contemplados en este Protocolo, el Comité convoca a la persona contra la cual se ha realizado la denuncia, para una entrevista confidencial. El fin de la entrevista es comunicarle la existencia de una denuncia, que efectúe las alegaciones que considere oportunas e informarle las posibles sanciones en caso de comprobarse la denuncia. Cuando se acrediten los hechos denunciados, el Comité debe solicitar a la autoridad que corresponda, las medidas precautorias o sanciones que estipule la reglamentación, o de corresponder se proceda a la instrucción de un sumario administrativo.

Artículo 9º.- El presente Protocolo debe ser notificado a todo el personal de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, debiendo suministrarse copia del mismo vía correo electrónico.

INGRESÓ EN MESA DE ENTRADAS: 08-09-2020

Expte.Nº 91-42.716/20

12/08/20

Dictamen de Comisión

Cámara de Diputados:

Vuestra Comisión de la Mujer ha considerado en forma virtual (video conferencia), el Proyecto de Resolución de la Dip. María Silvia Varg, por el cual “Aprobar el “Protocolo para la prevención e Intervención en situaciones de Violencia Laboral con perspectiva de género en el ámbito de la Cámara de Diputados.” Y, por las razones que dará el miembro informante, ACONSEJA SU APROBACION CON MODIFICACIONES, con el siguiente texto:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA

R E S U E L V E:

Aprobar el “Protocolo para la Prevención e Intervención en situaciones de Violencia Laboral con perspectiva de género en el ámbito de la Cámara de Diputados”, que como Anexo forma parte integrante de la presente.

Estipular el plazo de treinta (30) días corridos desde la aprobación de la presente resolución, para su reglamentación.

ANEXO

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE VIOLENCIA LABORAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 1º.- El presente Protocolo tiene por objeto prevenir y erradicar la violencia en el ámbito laboral, garantizando un ambiente libre de discriminación por cuestiones de género, identidad de género, orientación sexual, o de cualquier otro tipo en el ámbito de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta.

La Cámara de Diputados promueve acciones de concientización y capacitación para prevenir la violencia laboral y garantizar el respeto, la igualdad y equidad.

Artículo 2º.- Confórmase un Comité de Seguimiento de Violencia Laboral y de Género integrado por al menos tres (3) empleados de la Cámara de Diputados designados para prestar funciones por el Presidente, debiendo respetar la paridad de género en su conformación.

Artículo 3º.- El Comité tiene por misión recibir denuncias, generar un ámbito de contención y confianza, y brindar a la persona denunciante acompañamiento, asesoramiento, asistencia psicológica.

Artículo 4º.- Se entiende por violencia laboral las acciones y omisiones de personas o grupo de personas que, en ocasión del ámbito o relación laboral, en el espacio físico o virtual, en forma sistemática y recurrente, atenten contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y social de una persona, mediante acoso sexual, abusos, abuso de poder, ataques, amenazas, intimidación, amedrentamiento, trato discriminatorio, maltrato físico, moral, psicológico y/o

social. Se considera que la violencia laboral reviste especial gravedad cuando la víctima se encuentre en una situación de particular vulnerabilidad, por razón de su edad, estado de salud, inferioridad jerárquica, u otra condición análoga. Las enumeraciones del presente artículo no revisten carácter taxativo.

Artículo 5º.- Son principios rectores:

a) Asistencia. La persona denunciante recibirá, durante todo el procedimiento, asesoramiento a través del Comité de Seguimiento de Violencia Laboral y de Género.

b) Reserva de Identidad. Desde el inicio y hasta la finalización del procedimiento, se deberá garantizar a la persona denunciante la confidencialidad de los hechos y el resguardo absoluto de su identidad, así como de las demás personas involucradas y testigos. La reserva de la identidad de la persona damnificada se extiende aún después de concluido el procedimiento.

c) Protección a denunciantes y testigos. Ninguna persona trabajadora que haya sido víctima de violencia laboral, que haya denunciado las mismas o haya comparecido como testigo, podrá sufrir perjuicio alguno en su empleo o en cualquier otro ámbito, cuando el mismo le fuera ocasionado como represalia por su denuncia o testimonio.

d) Se presume, salvo prueba en contrario, que cualquier alteración en las condiciones de empleo que resulte perjudicial para la persona afectada, obedece a su denuncia o participación en el procedimiento relacionado con la violencia laboral, cuando dicha alteración ocurre dentro de los doce (12) meses subsiguientes a su denuncia o participación.

e) No re victimización. Se evitará que una persona denunciante realice reiteración innecesaria de los hechos que denuncie, a fin de evitarle sufrimiento.

Artículo 6°.- Queda automáticamente invalidada para formar parte del procedimiento, aquella persona miembro del Comité que resulte denunciada por alguno de los supuestos previstos en este cuerpo. También queda exceptuada de intervenir cuando se encuentre afectada por relación de parentesco o afectiva, de amistad o enemistad manifiesta con las personas denunciantes o denunciadas.

Artículo 7°.- Son funciones del Comité:

a) Tomar las consultas, presentaciones y denuncias; y si correspondiese, remitirlas a la Comisión de la Mujer para que dictamine al efecto.

b) Llevar adelante los procedimientos previstos en este Protocolo.

c) Elaborar informes escritos, fundados y rubricados por las personas miembros.

d) Confeccionar estadísticas de los casos de violencia laboral que se denuncien, a fin de tener un mapa integral de la situación y adoptar o perfeccionar las medidas de prevención.

e) Impulsar la realización de campañas y cursos para la prevención de la violencia laboral, así como la difusión del presente Protocolo.

f) Comunicar al superior Jerárquico de la persona denunciante la presunta comisión de un hecho contemplado por este Protocolo, salvo que fuere éste quien lo hubiere cometido, en cuyo caso debe informarlo al funcionario superior del denunciado.

Artículo 8°.- El procedimiento a llevarse adelante ante las denuncias previstas en este Protocolo tiene carácter de urgente, debiendo contemplar los principios del artículo 5°. Sin perjuicio de la reglamentación, se deben observar los siguientes preceptos:

a) Presentación: la persona puede denunciar la existencia de acciones o situaciones de violencia laboral ante el Comité por escrito o a través de una dirección de correo electrónico, y debe ratificarlo dentro de las 48 hs. por escrito o personalmente.

b) Entrevista: El Comité de oficio o a pedido de parte, fija una entrevista personal con la persona denunciante en el plazo que determine la reglamentación, la que prevé las situaciones urgentes. En caso de corresponder, se remite el informe a la Comisión de la Mujer y a la Comisión de Derechos Humanos, para que dictamine al efecto.

c) Etapas de Resolución: Recibida la presentación, el Comité realiza un análisis detallado de los hechos y analiza la entidad de los mismos. Ante la existencia de supuestos contemplados en este Protocolo, el Comité convoca a la persona contra la cual se ha realizado la denuncia, para una entrevista confidencial. El fin de la entrevista es comunicarle la existencia de una denuncia, que efectúe las alegaciones que considere oportunas e informarle las posibles sanciones en caso de comprobarse la denuncia. Cuando se acrediten los hechos denunciados, el Comité debe solicitar a la autoridad que corresponda, las medidas precautorias o sanciones que estipule la reglamentación, o de corresponder se proceda a la instrucción de un sumario administrativo.

Artículo 9°.- El presente Protocolo debe ser notificado a todo el personal de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, debiendo suministrarse copia del mismo vía correo electrónico.

SALA DE COMISIONES, 07 de Setiembre de 2020.-

Prestan Conformidad al presente Dictamen, los Señores Diputados

FIGUEROA EMILIA ROSA
Presidenta
RIGO BAREA, NOELIA CECILIA
Vice-Presidenta
CARTUCCIA, LAURA DEOLINDA
DE VITA, ISABEL MARCELINA
FERNÁNDEZ, VALERIA ALEJANDRA
JUÁREZ, JORGELINA SILVANA
JUÁREZ, MÓNICA GABRIELA
LANOCCI, EMMA FATIMA
LÓPEZ, MARIA DEL SOCORRO
NAVARRO, ALEJANDRA BEATRIZ
PAREDES, GLADYS LIDIA
VARG, MARIA SILVIA

Suscriben la presente para constancia:

Miriam Cañizares	Roberto Díaz	Raúl Romeo Medina
Administrativa	Jefe Sala de Comisiones	Secretario Legislativo

8.- Expte.: 91-42.819/20

Fecha: 28/08/20

Autores: Dips. Luis Antonio Hoyos y Franco Esteban Francisco Hernández Berni

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°: La presente Ley, tiene por objeto regular y promover la explotación convencional de los yacimientos de reserva natural de gas y petróleo denominados “Pozos Someros” de baja profundidad y productividad, ubicados en los departamentos Gral. San Martín, Orán y Rivadavia de la provincia de Salta.

Art. 2°: CRÉASE la Región Norte de explotación convencional de pozos someros de baja profundidad y productividad de gas y petróleo para el desarrollo económico y social que

comprenderá todo el territorio y superficie de los Departamentos mencionados en el artículo 1° de la presente.

Art. 3°: Autorícese al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar concesiones para la explotación de los yacimientos de reserva natural de gas y petróleo denominados "Pozos Someros" en la Región referida en el artículo 2° de la presente y a suscribir acuerdos sobre cooperación en la explotación de actividades hidrocarburíferas con entidades públicas, mixtas, privadas, nacionales o extranjeras.

Art. 4°: La Autoridad de aplicación de la presente Ley, será el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, a través de la Secretaría de Minería y Energía o el organismo que en el futuro lo reemplace con el fin de instrumentar las políticas necesarias y dictar las disposiciones complementarias para dar cumplimiento al objeto de la presente Ley.

Art. 5°: Toda persona física y/o jurídica domiciliada en la República Argentina, podrá solicitar a la Autoridad de Aplicación los permisos y/o concesiones correspondientes para desarrollar las actividades hidrocarburíferas en la región mencionada por el artículo 2°, con fines productivos, industriales y/o comerciales.

Art. 6°: Los términos y condiciones para el otorgamiento de concesiones, permisos y habilitaciones deberán asegurar el cumplimiento de los fines previstos en esta Ley; desarrollo regional, generación de empleo genuino en un 80 % mano de obra local, aumento de la producción, recupero del capital, y financiación de cualquier tipo de proyectos de inversión, referente a la reactivación de los Pozos Someros en la Región mencionada por el artículo 2°.

Art. 7°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ley será imputado a las partidas correspondientes a al Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio vigente.

Art. 8°: De forma.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente, Sras. Diputadas y Sres. Diputados:

La presente Ley, tiene por objeto regular y promover la explotación convencional de los yacimientos de reserva natural denominados "Pozos Someros" de baja profundidad y productividad, ubicados en los departamentos Gral. San Martín, Orán y Rivadavia. La misma constituye una reserva natural estratégica para el crecimiento económico y desarrollo social del norte provincial.

La presente se emite en consonancia con lo dispuesto por la Constitución de la provincia de Salta, el que en su artículo 82 establece: *“La Provincia promueve la exploración y explotación de los yacimientos mineros existentes en su territorio, velando por la correcta aplicación y cumplimiento de las leyes. Procura la industrialización de los minerales en su lugar de origen, favorece la radicación de empresas y atiende el mantenimiento y desarrollo de las comunicaciones y energía, en zonas mineras”*.

Es por ello, que se pretende con el presente proyecto, fomentar, atraer y generar actividades de índole hidrocarburíferas, con inversiones nacionales e internacionales en el sector, con el espíritu de lograr el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, asegurando el desarrollo local y regional, creando empleo genuino y reduciendo de una vez por todas las altas tasas de desocupación que presente el norte provincial hace décadas, como así también, exigiéndoles a las empresas mixtas o de capitales privados que reinviertan sus utilidades en los Departamentos comprendidos, es decir, Gral. San Martín, Orán y Rivadavia; favoreciendo la aparición de nuevos proyectos de inversión industrial o comercial en el norte de la provincia de Salta.

Por lo tanto, anhelamos con dicha iniciativa, impulsar con todas aquellas empresas que quieran explorar y explotar nuestros suelos, cumpliendo y respetando la legislación y el medio ambiente; el verdadero desarrollo competitivo y sustentable del departamento Gral. San Martín, la cual, es considerada como una zona económicamente castigada por la falta de inversiones en las últimas décadas.

Por otro lado, es necesario, recordar que hace dos décadas, Salta era la segunda productora de gas del país, y también ocupaba un lugar privilegiado entre las petrolíferas. Esas regalías permitieron a las gestiones de los entonces Gobernadores de Salta, Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey, obtener millonarios préstamos para infraestructuras con la simple garantía que daba la extracción de esos hidrocarburos.

Sin dudas, existe un consenso en la comunidad y en la dirigencia política, la necesidad de captar inversiones fuertes a mediano y largo plazo, con una visión desarrollista que logre reanimar la producción, creando oportunidades laborales en cantidad y en calidad, a través del aprovechamiento de nuestros suelos y recursos naturales, como son el petróleo y el gas.

Al respecto, los pozos hidrocarburíferos, denominados someros o de baja profundidad y productividad ubicados en el Norte Salteño, fueron heredados de la Compañía Estándar Oil y otros realizados o perforados por YPF entre 1922 y 1957. Los mismos tienen una profundidad aproximada entre 800 mts. y 1400 mts. y registran un nivel de producción bajo o nada como consecuencia de su inactividad prolongada.

Quemado 1 y Quemado 2 fueron los primeros pozos perforados ubicados en las inmediaciones de Vespucio, otros en Tablillas, San Pedrito, Lomitas, Traquitas, Ramos, Rio Pescado, Tartagal, Aguaray, Campo Duran, con un total de 332 pozos. Los mismos estuvieron produciendo en su momento y luego abandonados por razones técnicas.

Al respecto, la explicación de por qué ese abandono radica en que YPF, entre los años 1949 y 1957, perforo y descubrió pozos de petróleo de muy buena producción en el yacimiento Campo Duran que rendían entre 200 m³/día y 300m³/día por lo que se condujeron todos los esfuerzos y recursos en esa área específica.

Entre las características que se les destaca a los pozos Someros Hidrocarburíferos se pueden citar:

- a) Se encuentran inactivos desde hace muchos años.
- b) Tienen afloramientos de petróleo de manera natural en pequeñas cantidades.
- c) Sin casi nada de porcentaje de gas.
- d) Se pueden reactivar a través de técnicas de recuperación terciaria.
- e) Se aprecia a simple vista un hidrocarburo de los denominados intermedios.

La gravedad observable es que desde hace bastante tiempo se originan surgencias espontáneas de algunos de los pozos mencionados, poniendo en riesgo el ecosistema en general y familiar en particular de los que habitan cerca de los escurrimientos de petróleo.

A modo de ejemplo, se puede citar una de las últimas pérdidas de crudo hacia la superficie, de público conocimiento, ocurrido el 23 de abril de 2020. Vecinos de Villa Tranquila – Vespucio – Municipio Gral. Mosconi, experimentaron el escurrimiento de petróleo desde el fondo de su domicilio, originando una evacuación de 30 personas para evitar toxicidad y problemas graves de salud. Como así también, una posible contaminación ambiental generalizada producto de los incendios que se podrían ocasionar con pérdidas inimaginables para la región.

Es por ello, que pasaron muchos años desde esa época de privatización de las áreas hidrocarburíferas, sin haber realizados intentos de reactivación de los pozos someros, probablemente porque lo que pueden producir no es del interés para estas grandes multinacionales, que vuelcan sus esfuerzos y sus inversiones varias veces millonarias en otros proyectos que se caracterizan por ser pozos profundos y llegan a las formaciones geológicas profundas como ser Icuá, Santa Rosa y Guamampampa, las que se encuentran a más de 5.000 mts. de profundidad.

En 1994 se promulgaba la nueva Constitución Argentina, que en su artículo 124 establecía que correspondía a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio y que daba visos de legalidad constitucional a la Ley Nacional 24.145 de Federalización de los Hidrocarburos.

Las concesiones de Explotación serán otorgadas por el Ejecutivo Nacional o Provincial, que además podrán otorgarlas sobre zonas probadas.

Entendemos, que es el momento oportuno de revisar y/o reconvertir los permisos de exploración y esas concesiones de explotación, en Asociación de Pymes de ex - ypefianos entre el Estado Nacional - YPF (titular) y/o el Estado Provincial, únicamente sobre pozos someros.

También es viable la concesión de concesión o sea que el titular de un área concesionada pida la Subdivisión de la misma ya sea superpuestas o no. Específicamente armar y diferenciar las futuras áreas de pozo someros, esto no implicaría problema alguno con el área citada, porque los someros están en otras formaciones geológicas.

Finalmente, resulta oportuno referir a la situación económico-social del Norte de Salta. Actualmente se experimenta uno de los índices más altos de pobreza producto de la desocupación. También, cierta desidia en lo político, económico, social, laboral, salud, educación y todo lo que conlleva la situación de no tener trabajo en el lugar, cuando tres generaciones supieron convivir con la industria hidrocarburífera por tantos años.

La reactivación económica y productiva, viene de la mano de estas actividades y proponiendo innovación tecnológica.

De allí que este proyecto surge con la idea de generar trabajo genuino para los departamentos citados precedentemente. Es decir, Pozos Someros operados por ex - ypefianos, conformados en micros y pequeñas Pymes locales, Provinciales y/o Nacionales. Esto traería aparejado múltiples beneficios al Norte Salteño. Sin mencionar específicamente las tareas vinculadas con la puesta en marcha, operación y mantenimiento de los pozos; reparación de nuevos caminos, proveedores locales de bienes y servicios.

Sabemos que el ingreso Provincial ha disminuido al igual que la producción hidrocarburífera; este plan integral piloto citado, originará de manera inmediata el incremento de las regalías, dignificará a los vecinos del lugar, y se desarrollará la actividad con un adecuado cuidado del medio ambiente.

Por lo expuesto, solicito a mis pares, acompañar para la aprobación del presente proyecto de Ley, que logrará incentivar inversiones nacionales e internacionales, como así también, promoverá el desarrollo productivo y social, del norte provincial.

9.- Expte: 91-43.114/20

Fecha: 20/10/20

Autores: Dips. Germán Darío Rallé, Osbaldo Francisco Acosta, Sergio Daniel Cisneros, Ana Laura Córdoba, Eduardo Ramón Díaz, Valeria Alejandra Fernández, Marcelo Rubén Oller Zamar, Gustavo Orlando Orozco y Lino Fernando Yonar.

**Proyecto de Ley
El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia,**

Sancionan con Fuerza de

Ley:

REGULACIÓN DE HONORARIOS POR ACTUACIÓN DE PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS CRIMINALISTAS Y CRIMINOLOGÍA DE SALTA.

Artículo 1°.- Los honorarios de los profesionales de las Ciencias Criminalísticas y Criminológicas tienen carácter alimentario, quedando ello expresamente establecido en la presente y debiendo incluirse el mismo en todo pacto o regulación que se practicare a partir de su entrada en vigencia, salvo en los casos en que, conforme excepciones legales, pudieren o debieren actuar gratuitamente.

Los profesionales que actuaren para su cliente con asignación fija, periódica, por un monto global o en relación de dependencia, no están comprendidos en la presente Ley, excepto respecto de los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella relación, cuando existiere pacto expreso en contrario o cuando mediare condena en costas a cargo de otra de las partes intervinientes en el proceso.

Art. 2°.- La presente Ley rige los honorarios de los profesionales de las ciencias criminalísticas y criminológicas comprendidos en la Ley provincial 7.918. Los honorarios de estos profesionales, por su actividad judicial o extrajudicial, se determinarán con arreglo a la presente Ley, salvo que se hubiera celebrado convenio por una suma mayor. Será nulo todo pacto o regulación por cantidad menor de las que esta Ley determina. Podrán pactarse honorarios exclusivamente con relación al trabajo efectuado por el profesional o a la duración del mismo.

Art. 3°.- Institúyase con la denominación de "**uhcri**" (unidad honoraria criminalística) a la unidad arancelaria de honorarios profesionales de los profesionales de las ciencias criminalistas

y criminología, cuyo valor será estimado en el cinco por ciento (5%) del salario mínimo vital y móvil que fije el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio competente.

El Colegio de los Profesionales de las Ciencias Criminalistas y Criminología de Salta informará trimestralmente el valor del "uhcri", eliminando las fracciones decimales.

Sin perjuicio del sistema porcentual determinado para los procesos con base económica, los honorarios profesionales regulados no podrán ser inferiores a los mínimos establecidos en la presente Ley. Los siguientes valores se fijan de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 10 de esta Ley.

1.- Honorarios mínimos en asuntos judiciales no susceptibles de apreciación pecuniaria.

Fuero Penal: **20 uhcri**

Fuero y Materia de Familia: **17 uhcri**

Fuero y Materia Administrativo: **19 uhcri**

Fuero y Materia Civil y Comercial: **19 uhcri**

Fuero y Materia de Minas y en lo Comercial de Registro: **15 uhcri**

Fuero y Materia Laboral: **17 uhcri**

Los honorarios por estas actuaciones podrán acrecentarse hasta en un cincuenta por ciento (50 %) más del mínimo en caso debidamente fundado, sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones de la presente Ley.

Independientemente del fuero de intervención cuando luego de aceptado el cargo por parte del perito, la parte peticionante desistiera de la pericia, o no depositare el monto de anticipo de gastos fijados por el Juez, a petición del Perito, el Juez regulará los honorarios del mismo, que no podrán ser inferiores a **2 uhcri**.

2- Honorarios mínimos en asuntos judiciales con base económica.

A los fines de establecer un mínimo ético para toda clase de juicios contenciosos se aplicará la siguiente escala: cuando el monto en disputa es inferior a cinco (5) sueldos mínimos vital y móvil, será el 12% de dicho monto; cuando el monto en disputa sea entre seis (6) y veinticinco (25) sueldos mínimos vital y móvil, será el 9% de dicho monto; cuando el monto en disputa sea entre veintiséis (26) y cincuenta (50) sueldos mínimos vital y móvil, será el 7% de dicho monto; cuando el monto en disputa sea superior a cincuenta y un (51) sueldos mínimos vital y móvil, será el 6% de dicho monto.

3.-Honorarios mínimos por la labor extrajudicial.

Consultas verbales: **3 uhcri**

Consultas evacuadas por escrito: **7 uhcri**

Informes o compulsas de actuaciones judiciales o administrativas: **4 uhcri**

Procesos vinculados a cuestiones ambientales: **15 uhcri**.

Art. 4°.- La actividad profesional de los Profesionales de las ciencias criminalísticas y criminológicas se presumen de carácter oneroso.

Los honorarios gozan de privilegio general, y son embargables sólo hasta el veinte por ciento (20 %) del monto que supere el salario mínimo, vital y móvil, excepto si se tratare de deudas alimentarias y de litis expensas.

El pago instrumentado en recibo o factura de honorarios con imputación precisa del asunto, de fecha anterior a la conclusión de la gestión profesional, se considera como pago a cuenta.

Art. 5°.- La labor profesional notoriamente inoficiosa, declarada judicialmente, no será considerada a los efectos de la regulación. Tampoco tienen derecho a honorarios los Profesionales que incurran en conducta procesal maliciosa o temeraria, declarada judicialmente, y los que actúan sin matrícula habilitada por el Colegio de Profesionales de Criminalística y Criminología de Salta.

Art. 6°.- Los honorarios de los técnicos y auxiliares que actuaren en conjunto con el perito principal de la pericia se determinarán en el cuarenta por ciento (40%) de lo que por esta Ley fija para los Profesionales. Para devengar estos honorarios los técnicos o auxiliares deben encontrarse incorporados en el proceso en calidad de tal.

A los efectos de la regulación, la firma del perito designado judicialmente implica la dirección profesional de la labor pericial.

Art. 7°.- Los Profesionales podrán participar en el resultado de los asuntos o procesos llevados adelante siempre que sea pactado con sus clientes.

Los honorarios de todos los Profesionales que intervengan, en conjunto y por todo concepto, no podrán exceder del treinta por ciento (30%) del resultado económico obtenido, sin perjuicio del derecho de los profesionales a percibir los montos que se regulen. El pacto se efectivizará por escrito y no admitirá otra prueba de su existencia que la exhibición del propio documento o el

reconocimiento de la parte obligada al pago de honorarios. Solo podrá ser superior si el Profesional toma a su cargo los gastos de la realización del trabajo pericial pudiendo ser elevado al cuarenta por ciento (40%).

En caso que el justiciable entienda pertinente el cambio de Profesional, el pacto seguirá vigente, y el Profesional podrá solicitar regulación de honorarios por las etapas cumplidas respetándose el porcentaje acordado, salvo que aquella hubiese sido motivada por culpa del Profesional actuante fehacientemente determinada por autoridad judicial, en cuyo caso conservará el derecho a la regulación, si correspondiere.

El Profesional que hubiere celebrado pacto de cuota litis y comenzado sus gestiones, puede apartarse del juicio en cualquier momento. Sus honorarios se regularán judicialmente, para lo cual se tendrá los términos del convenio en forma proporcional a la etapa del proceso alcanzado.

Art. 8°.- El Colegio de Profesionales de Ciencias Criminalísticas y Criminológicas registrará, a pedido de parte, los convenios de honorarios y los pactos de cuota litis. En caso que se demanden honorarios convenidos provenientes de la labor profesional, se procederá a preparar la vía ejecutiva a tenor de lo dispuesto por el Código Procesal Civil y Comercial, acompañando al efecto la documentación que acredite la labor profesional y el convenio suscripto por el obligado.

Art. 9°.- Por pacto expreso se podrá acordar con el profesional el sistema de retribución por tiempo de trabajo empleado. En tales casos se tomará como unidad cronométrica mínima la de 30 minutos, la que será estimada en un valor mínimo ético de un (1) uhcri, teniendo en cuenta la complejidad del asunto y la especialización y experiencia del Perito. Dicho sistema se aplicará para:

- a) Consultas con clientes.
- b) Reuniones con otros profesionales, sean o no de la misma rama científica u Colegio; siempre que se celebren en el despacho del Profesional.
- c) Consultas telefónicas o con nuevas tecnologías.

En los casos que las reuniones deban celebrarse fuera del despacho del Profesional, en otras jurisdicciones o localidades se aumentará los montos previstos en un cien por ciento (100%).

Art. 10.- Para la regulación final de los honorarios se tendrá en cuenta, de manera conjunta y no excluyente los siguientes criterios:

- a) El monto del interés económico comprometido por la prueba pericial.
- b) La naturaleza y complejidad de la tarea realizada.
- c) El mérito de la labor profesional, apreciado por la calidad, eficiencia y extensión del trabajo.
- d) En los casos en que no pueda determinarse el monto del interés económico comprometido, se tomará en cuenta lo establecido en los incisos b) y c).
- e) Las diversas diligencias que ha tenido que realizar el Perito para cumplir su cometido, presentación de escritos, notificaciones, etc.
- f) La incidencia de la pericia en la decisión judicial en relación al grado de necesidad de esta prueba para los fundamentos de la misma.

Art. 11.- En los casos de litis consorcio activo o pasivo, en que actúen diferentes profesionales al servicio de cualquiera de las partes, los honorarios de cada uno de ellos se regularán atendiendo a la respectiva actuación cumplida y a las pautas de esta Ley.

Cuando actúen conjuntamente varios profesionales designados o propuestos por una misma parte, a los efectos arancelarios se considerará que ha existido una sola actuación, y se regularán los honorarios individualmente en proporción a la tarea cumplida por cada uno.

Art. 12.- Se considerará monto del proceso la suma que resultare de la sentencia o transacción, intereses y costas del proceso.

Art. 13.- Cuando para la determinación del monto del proceso debiera establecerse el valor real y actual de los bienes muebles o inmuebles, se correrá vista al Profesional y al obligado al pago del honorario, para que en el plazo de cinco (5) días estimen dichos valores.

Art. 14.- Cuando para la determinación del monto del juicio deba establecerse el valor de bienes inmuebles, se tendrá en cuenta la valuación fiscal para el pago de la contribución territorial, salvo que se hubiera practicado en autos la tasación judicial de los mismos. No obstante, si se estimare que la valuación fiscal no representa el valor real del inmueble, los profesionales podrán solicitar previamente a la regulación, que el cliente o la parte deudora de las costas, en su caso, declare bajo juramento el valor que atribuye al bien, bajo apercibimiento, para el caso de no hacerlo, de procederse a la valuación por perito y a costa de los deudores. Si formulada por el cliente o, en su caso, por la parte deudora de las costas la declaración del valor inmueble, el Profesional no estuviere conforme con ella podrá éste pedir valuación

pericial, la que se practicará por un perito único designado por el Juez. Si la diferencia entre el valor asignado al inmueble en la tasación pericial no excediera en más de un veinte por ciento (20 %) del valor declarado por el cliente o por la parte vencida en costas, en su caso, los honorarios y gastos ocasionados por la pericia serán a cargo del Profesional que la hubiere solicitado y si la diferencia en más excediera dicho porcentaje, serán a cargo del cliente o de la parte vencida en costas, según el caso.

Igual procedimiento se seguirá si se tratara de inmuebles no valuados por el Fisco o de bienes muebles no tomados en el proceso.

Art. 15.- En los procesos sucesorios se tomará como base regulatoria el valor real y actual del patrimonio que se transmitiere. En caso de tramitarse más de una sucesión en un mismo proceso, el monto a los fines de la regulación será el del patrimonio transmitido en cada una de ellas.

Art. 16.- El Profesional tendrá derecho a solicitar la regulación de sus honorarios profesionales en cualquier etapa del proceso, pudiendo ser estimados provisoriamente en base a la actuación efectivamente desempeñada, respetándose los mínimos establecidos en esta Ley.

Art. 17.- Toda regulación judicial de honorarios profesionales deberá fundarse y practicarse con citación de la disposición legal aplicada bajo pena de nulidad.

El Profesional que acordare u aceptare honorarios inferiores a los mínimos, será pasible de sanción por el Tribunal de Ética del Colegio de Profesionales de Criminalística y Criminología.

Art. 18.- A petición del Profesional, será parte interesada el Colegio de Profesionales de Criminalística y Criminología de la provincia de Salta, en toda actuación donde se discuta honorarios profesionales, debiendo darse la participación correspondiente a través de la vista de rigor, pudiendo ser apelable cualquier suma regulada sin importar el monto.

Art. 19.- El Profesional que ha realizado una pericia podrá solicitar la regulación de los honorarios provisorios junto con su presentación y requerir que la misma sea reservada en Secretaría del Juzgado hasta tanto sea satisfecho el pago de los honorarios provisorios, mientras tanto las partes no tendrán acceso a la misma ni podrá hacérsela valer en el expediente.

El Juez tendrá acceso a la pericia a los fines de su merituación y fijación de los honorarios provisionales, pero no podrá dar vista de ella a las partes u otro tercero, salvo al Colegio de Profesionales de Criminalística y Criminología de la provincia de Salta.

Para el caso de que la parte desista de la pericia o trascurrido el plazo que fijare el Juez acorde a la naturaleza del proceso y del caso en particular, sin que la parte haya satisfecho el pago de los honorarios provisorios fijados, el Juez podrá tener por desistida la prueba y se cargará a esta parte un 50% del valor provisorio fijado. No podrá realizarse nueva pericia que verse sobre el mismo tema o de la misma naturaleza en el expediente sin haberse cumplido esta obligación, sin que esto implique detener el proceso, pudiéndose a criterio del Juez tramitarse el cobro por vía incidental.

La ejecución de honorarios por parte del perito actuante en los autos gozará de los beneficios tributarios y procesales de las ejecuciones alimentarias.

Derecho de repetición del pago de honorarios.

Si del resultado del proceso surgiere que la parte que ha pagado no debía soportar la costa, ésta tendrá derecho a repetir lo pagado a su contraparte conforme a las reglas del proceso en donde haya ocurrido la sentencia.

Art. 20.- El pago de los honorarios puede perseguirse en contra de los condenados en costas, de sus garantes, de los comitentes y de cualquiera que se beneficie de la labor profesional.

Art. 21.- Las deudas de honorarios pactados o regulación judicial firme, devengará intereses conforme a lo estipulado en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Art. 22.- Toda notificación a las partes deberá realizarse en su domicilio real o en el que especialmente hubiere constituido a estos efectos en el expediente. Si no es conocido el domicilio real, se notificará donde se encuentre el obligado al pago; y si este domicilio también se ignora, en el último domicilio registrado en el Padrón Electoral.

Art. 23.- Esta Ley se aplicará a todos los asuntos o procesos pendientes en los cuales no hubiere recaído resolución firme regulando honorarios al tiempo de su entrada en vigencia.

Art. 24.- El Colegio de Profesionales de Criminalística y Criminología publicará trimestralmente una lista orientativa de importes referidas a los adelantos de gastos para la realización de cada pericia, a la que deberá sujetarse el pedido de adelanto de gastos formulado por el Profesional interviniente bajo pena de nulidad.

Dicha lista deberá fundamentarse en índices oficiales de aumento de precios bajo pena de poder ser cuestionados judicialmente y reajustados por el Juez cuando la parte demuestre que no respeta tales índices o que hubiera error o diferencias interpretativas. Lo resuelto *ad hoc* en el proceso solo tendrá validez para el mismo.

El Juez interviniente, a pedido de parte y de forma fundada, podrá reducir el adelanto de gastos hasta un 20%.

Art. 25.- El Profesional interviniente podrá en todos los casos rechazar la realización de la pericia, aún luego de haber hecho posesión de cargo, si el adelanto de gastos fijado no se adecuare a la planilla publicada por el Colegio Profesional o si demostrare fundadamente que requiere de mayores importes para el caso de la pericia en particular. Esta declinación bajo ningún aspecto podrá tener como consecuencia sanción alguna, salvo que cualquiera de las partes demostrase que hubo negligencia en la labor desarrollada.

Se entenderá aceptada la regulación de adelanto de gastos cuando el profesional debidamente notificado no se manifiestare en el plazo procesal oportuno. Si luego de posesionado en el cargo de Perito, la o las partes peticionantes desistieren de la realización de la pericia o no depositaren el importe fijado en concepto de anticipo de gastos peticionado por el Perito, el Juez interviniente regulará los honorarios del mismo, teniendo en cuenta la labor que lleva realizada y ordenará la restitución de los gastos acreditados.

Art. 26.- El Profesional que acordare u aceptare adelantos de gastos inferiores a los mínimos, salvo en los casos fijados en los artículos precedentes, será pasible de sanción por el Tribunal de Ética del Colegio de Profesionales de Criminalística y Criminología. El Juez del proceso de oficio deberá notificar al Colegio de Profesionales de Criminalística y Criminología y a la Secretaría de la Corte de Justicia de la Provincia a los fines de que el Profesional sea suspendido de las listas oficiales por el término de un (1) año a partir de la fecha de notificación.

Art. 27.- Para el caso de que no hubiere sido realizada la pericia cualquiera de las partes o el Colegio de Profesionales de Criminalística y Criminología podrán pedir la remoción del Profesional actuante y el rechazo *in limine* para el caso de que presentare la pericia. Si cualquiera de las partes del proceso hubiere tenido participación se le podrá dar por decaída la prueba o ser considerada nula, salvo oposición expresa de la otra parte o que el Juez la considerare necesaria para el conocimiento de la verdad material del hecho, lo que no implica la exención de la sanción del artículo precedente.

Art. 28.- La presente Ley tiene carácter de orden público.

Art. 29.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fundamentos:

Sr. Presidente, Sres. Diputados:

a) La naturaleza de la labor del Perito.

En primera instancia cabe definir la naturaleza y el alcance de la tarea del Profesional sobre quien versa el presente proyecto normativo.

Así entonces, en primer lugar, debemos tener presente que la labor desarrollada por el Perito interviniente en cualquier proceso -civil, penal o de otra naturaleza- es distinta de la realizada por las partes y sus abogados. El perito no realiza una interpretación normativa o valorativa del hecho, sino que se limita, dentro de cánones más estrictos, puesto que actúa acorde al método científico de las Ciencias Naturales, al estudio del hecho como *fenómeno científico* y como tal no puede adecuar o supeditar el hecho a una interpretación o criterio. El Perito debe limitarse a la investigación del hecho *puro* y explicar la forma en que aconteció el mismo al juzgador para que este conozca más acabadamente la **verdad real objetiva** que se intenta dilucidar en el proceso.

En resumen, puede decirse que el Perito no interpreta *la realidad* en sí, sino que, en todo caso, puede llegar a interpretar los rastros que el hecho ha dejado una vez ocurrido-a través de los

indicios- para reproducir intelectualmente el mismo, explicarlo y exponerlo a los fines de que, con este conocimiento acabado, pueda el auxiliar de justicia o el propio Juez realizar la correspondiente tipificación o subsumición a la norma para su consecuencia jurídica.

Así entonces nos encontramos frente a un **auxiliar esencial** de la justicia, puesto que, a través de su conocimiento científico, devela la verdad que se encuentra oculta al ojo no capacitado, pero no modifica el hecho, sino que lo explicita.

Resulta menester saber esto para diferenciar la *naturaleza* de la labor del Perito del resto de los auxiliares de justicia, puesto que mientras que los abogados *interpretan* en clave jurídica la consecuencia del *hecho*, el perito se limita a *revelar* el mismo, pero sin realizar modificación o interpretación alguna, la cual queda reservada al Profesional del derecho.

b) La situación procesal del perito en virtud de la naturaleza de su labor.

Conforme lo expuesto en el punto anterior, resulta lógico entonces concluir que el Perito **no reviste condición de parte en el proceso**. Esto es así porque su labor se ve limitada, como dijimos, a la ilustración sobre el hecho jurídico *tal cual este ocurrió en el mundo real*, pero sin intencionalidad de dotar al mismo de consecuencia, puesto que, como se expresó arriba, sujetado por el método natural moderno, no puede valorar ni tergiversar el hecho, cuestión que el método de las Ciencias Sociales si permite, dado que éste busca la *comprensión valorativa* del mismo, mientras que la ciencia natural se orienta a la *demonstración objetiva*, desprendida de la valoración.

Aun así, para el caso del **Perito de parte** este es un profesional propuesto *por la parte*, por ello la preposición “de”, ya que es ofrecido por la parte a fin del correcto control respecto de lo que arriba tratamos sobre el acatamiento del método científico como garantía procesal, pero no como proposición interpretativa.

Es entonces que, dado que el mismo no es parte como dijimos, no corresponde que deba ser, en principio, sujeto a la suerte que las mismas sufran en el proceso.

Ahora bien, claro está que en diferente posición se encuentra el Perito, aun no siendo parte, que es ofrecido por la parte al que es traído al proceso en carácter de profesional oficial.

En principio el Perito de parte acuerda con su cliente la retribución por su labor, operando la libertad de contratación en este ámbito, pero, sin embargo, esta libertad debe tener sus pisos mínimos legales, por un lado, y las garantías para el caso de que la parte no cumpliera su compromiso, por el otro, idénticas a las que goza el Perito que por azar fuera sorteado en un proceso en calidad de oficial. Estos mecanismos ya operan en la reciente Ley de honorarios profesionales de los abogados en nuestra Provincia, y en numerosas legislaciones relativas a diversos auxiliares de justicia en el ámbito nacional.

c) La realidad actual del cobro de honorarios de los Peritos.

Resulta evidente que el Perito que actúa en los Tribunales hoy en día bajo ningún concepto puede pretender vivir de las retribuciones que en los mismos le son fijadas por su actuación, porque:

1º En primer lugar por el monto de las mismas, que resultan muy alejadas de una cabal valoración de la tarea desempeñada, la cual no es solamente una tarea intelectual, sino que apareja al Perito la mayoría de las veces una labor física y el uso de instrumentos especializados.

2º La enorme dilación entre el momento de la presentación de la pericia y la regulación de su valor y su posterior percepción hacen que, al momento de efectivizarse el pago, el mismo resulte desactualizado.

3º La compleja trama por la que el Perito debe pasar para efectivizar su reclamo por el pago de sus honorarios.

Esto se puede demostrar fácilmente consultando a cualquier Perito que lleve al menos 5 años de ejercicio de la profesión.

d) Ley de honorarios y dignidad profesional y humana.

La sanción del Decreto Ley 324/63 significó una conquista importante en la reivindicación pública de la profesión. No obstante, la época actual dista mucho del contexto y condiciones de ejercicio profesional en que el mismo fuera puesto en vigencia. Basta solo con cotejar el costo actual de vida, la inflación desmedida, la variación de los índices de precios, la constante oscilación en alza del salario mínimo vital y móvil y las demás circunstancias nefastas en que se ve envuelta la economía de nuestro País, sin ningún parámetro ni equilibrio sistemático, dependiendo prácticamente del poder político y su relación con los mercados y organismos de préstamos internacionales.

Es menester considerar que el abogado, dentro de ese contexto, dista mucho de ser considerado una isla en el ejercicio de su profesión puesto que su retribución, por la labor realizada proviene en la mayoría de los casos de la gente que contrata sus servicios. La labor profesional en relación de dependencia, las asesorías jurídicas, las locaciones de servicios, etc... constituyen la excepción a dicha regla”, este extracto de la Fundamentación de Motivos de la recientemente sancionada Ley 8.035 - Honorarios profesionales de abogados y procuradores, resulta por analogía acabadamente aplicable a la labor del perito criminalista.

Expone también el Dr. Burgos en este texto “por una razón metodológica, entiendo pertinente aclarar sobre la extensión y sentido con que debemos interpretar el concepto de **"dignidad en el ejercicio de la profesión"**. Según la definición del diccionario, digno “es el que merece algo, proporcionado al mérito y condición de una persona o cosa”. A contrario sensu, podríamos considerar que un acto es opuesto a la dignidad de determinada persona cuando el mismo la desmerece, la desprecia o le resta mérito a su verdadero valor. La dignidad, o "calidad de digno", deriva del adjetivo latino dignus, se traduce por "valioso"; es el sentimiento que nos hace sentir varios y valiosos sentimientos con nosotros mismos, sin importar nuestra vida material o social. Hace referencia al valor inherente al ser humano en cuanto ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad. La dignidad refuerza la personalidad, fomenta la sensación de plenitud y satisfacción”; resultaría entonces ilógico, sino repulsivo, proveer de protección legal a un eslabón de la cadena de administración de justicia y menospreciar a otra tan fundamental como la primera. Así el Perito resulta en el proceso tan útil como el propio abogado y aún más relevante para el Juez en cuanto al conocimiento científico de la verdad en cuanto al hecho ocurrido.

e) Conclusiones.

Así expuesta la cuestión resulta clara la necesidad y justicia de la sanción de una norma que resuelva la injusta situación que viven los Profesionales de las Ciencias Criminalísticas y Criminológicas de la Provincia, por una parte, por el estado de inexactitud en cuanto a la determinación del valor de su trabajo que degenera en la infravaloración en detrimento del profesional, y por otra respecto a la posibilidad real de percibir su justa retribución.

La sanción de esta Ley pondría fin a la postergación de un colectivo relegado en nuestra comunidad a la paradoja tener un papel primordial en la administración de justicia, pero no recibir su retribución por ello.

La reciente sanción de la Ley de Honorarios Profesionales de los Abogados convierte en deber moral ineludible la sanción de una norma similar para los Profesionales de los que hablamos ahora, suponer lo contrario obraría como una automática discriminación y denigración arbitraria de un Profesional sobre otro, cuando ambos son evidentemente necesarios y dependientes para su labor y el bien de la comunidad.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos acompañen, con la aprobación del presente proyecto.

NOTA: ÚLTIMO PROYECTO INCLUIDO EN ACTA DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL 3-11-2020.